

**LOS WIKILEAKS “OLVIDADOS”: DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS
DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y EL DERROCAMIENTO DE
GOBIERNOS LATINOAMERICANOS**

The “forgotten” wikileaks: declassified documents of the United States Department of State and the overthrowing of Latin American governments

Silvina María Romano

Silvina María Romano

Becaria posdoctoral de la Coordinación de Humanidades-CIALC, UNAM. Doctora en Ciencia Política por el Centro de estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. Licenciada en Historia y Lic. en Comunicación por la UNC. Sus líneas de investigación son: integración, desarrollo y dependencia en América Latina; las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante la Guerra Fría y en la actualidad; democracia y seguridad en Estados Unidos; migraciones, integración regional y subdesarrollo en América Latina. Algunas publicaciones recientes: “Political-Economic Factors in U.S. Foreign Policy: The Colombia Plan, the Mérida Initiative, and the Obama Administration”. *Latin American Perspectives*. July, 2011 pp: 93-108 (En coautoría con Dr. Gian Carlo Delgado Ramos); “Liberal democracy and national security: continuities in the Bush and Obama administrations” *Critical Sociology*, noviembre 2011; “Democracia liberal y seguridad en el Gobierno estadounidense: continuidades” en Gandásegui, Marco y Castillo Fernández, Dídimo. *Estados Unidos: la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación* (GT EEUU) México: CLACSO-Siglo XXI, 2010; “El rol del capital multinacional en la periferia y su incidencia en los procesos de integración regional: La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)” *Revista Economía, Sociedad y Territorio*; Colegio Mexiquense, A.C, septiembre-diciembre, n° 31, pp. 581-627, 2009.

E-mail: silvinamceleste@gmail.com

Resumen

En el siguiente artículo se propone recuperar información secreta del gobierno estadounidense ya desclasificada por diversos organismos oficiales hace varios años, que permite dar cuenta del modo en que ha operado la articulación gobierno de Estados Unidos-sector privado, para garantizar la expansión de los intereses estadounidenses en América Latina. Dentro de este contexto, el trabajo se centrará en la documentación publicada por el Departamento de Estado estadounidense, el *National Security Archive* y la CIA, que incluye las discusiones, lineamientos y decisiones de funcionarios de Departamento de Estado, de Defensa, del Tesoro, de la CIA y de diferentes representantes del sector privado estadounidense con respecto a los gobiernos de Jacobo Arbenz en Guatemala (1950-1954), Joao Goulart en Brasil (1961-1964) y Salvador Allende en Chile (1970-1973). El objetivo es indagar, desde un abordaje crítico, el modo de operar de Estados Unidos en la región durante las primeras décadas de la Guerra Fría.

Palabras claves: documentos desclasificados, golpe de Estado, intervencionismo estadounidense

Abstract:

In the following article the proposal is to retrieve classified information of the US government, that has been published by various official organizations during the last decades, and that enables us to know the way in which private and public interests worked together in order to ensure US interests in Latin America. In this context, we will analyze documents published by the United States Department of State, the National Security Archive and the CIA, corpus that includes the guidelines, opinions and decisions of various representatives of the US Departments of State, Defense, Treasury and the CIA, as well as the opinions of influential individuals from the private sector, regarding the democratic administrations of Jacobo Arbenz in Guatemala (1950-1954); Joao Goulart in Brazil (1961-1964) and Salvador Allende in Chile (1970-1973). Following a critical theoretical perspective, the main goal is to figure out and show significant evidence about the way of “doing things” of US government in Latin American during the first decades of the Cold War.

Key Words: *declassified documents, Coup d’Etat, United States intervention.*

Introducción

El nuevo milenio ha dado cuenta de importantes tendencias hacia cambios significativos en América Latina, en parte como resultado de las consecuencias que el ajuste estructural ha generado en la región. Entre los procesos más destacados, notamos la presencia de gobiernos con propuestas políticas, económicas y sociales que buscan marcar un quiebre con respecto al modelo neoliberal. Indicio de esto han sido y son el gobierno de Evo Morales en Bolivia, de Hugo Chávez en Venezuela, de Correa en Ecuador, e incluso algunas características del gobierno de Lula da Silva en Brasil. Asimismo, desde estos gobiernos se ha buscado reforzar los mecanismos de integración regional, tendencia que adquirió vigor también en el marco del fracaso del proyecto hemisférico de Estados Unidos materializado en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). De hecho, la creación de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América ALBA, con el protagonismo de Cuba y Venezuela- y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ponen en evidencia la emergencia de modelos de integración que se apartan en buena medida de las propuestas centradas en la liberalización del comercio. Cabe señalar también la reciente creación de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) por iniciativa del ex presidente

brasileño Lula da Silva, y que se postula como un organismo paralelo a la Organización de Estados Americanos (OEA), sin la presencia de Canadá y Estados Unidos.

No obstante, también parecen existir indicios de intervención en los intentos de desestabilización en algunos de los gobiernos mencionados, como podría ser el Golpe de Estado a Hugo Chávez (Venezuela) en el 2002 o la desestabilización al gobierno de Evo Morales en el contexto de la disputa por la autonomización de la región de la “media luna” boliviana (2008), el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya en Honduras (2009) y el intento de desestabilización al gobierno de Rafael Correa en Ecuador (2010). Estos eventos, de acuerdo con diferentes fuentes de información, contaron con el apoyo directo o indirecto del gobierno y el sector privado estadounidense (Gollinger, 2005; Gandásegui, 2009; Castro, 2010). A esto se suma la militarización de las fronteras y el incremento del rol de los militares en cuestiones de “orden interno” en el marco de programas contra el “narco-terrorismo” impulsados por el gobierno estadounidense, como el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina y su expansión hacia el norte materializada en la Iniciativa Mérida (Delgado y Romano, 2011). La información recientemente publicada por Wikileaks, deja en evidencia las actividades de espionaje realizadas por los embajadores estadounidenses en relación a funcionarios gobiernos extranjeros e incluso funcionarios de organismos internacionales (Tejeda, 2010).

A la luz de este contexto y considerando los recientes documentos secretos filtrados por Wikileaks, vuelven a surgir una serie de preguntas bastante usuales durante las primeras décadas de la Guerra Fría, como ¿quiénes condicionan los lineamientos de la política exterior estadounidense?, ¿a favor de quiénes y con qué objetivos?, ¿quiénes definían el alcance de la concepción de seguridad nacional?, ¿quiénes definían el contenido de la noción de “interés nacional”?, ¿cuál es la relación/distancia entre la retórica y las acciones concretas de dicho gobierno en América Latina?, ¿cuál era el rol de América Latina en la política exterior estadounidense?, ¿cómo se plantea la relación entre las clases dominantes de América Latina y la élite de poder estadounidense y qué sucede cuando buena parte de la clase política que ocupa la esfera política formal se niega o cuestiona (en mayor o menor medida) el formar parte de la red de poder tejida por estas minorías?, ¿qué papel jugaron las Fuerzas Armadas de América Latina en el

marco de la expansión del sistema capitalista monopólico?, ¿cómo operaron las embajadas ante la presencia de gobiernos adversos a la política exterior estadounidense?

Es a partir de dichos cuestionamientos que resulta interesante revisar documentación secreta que ya ha sido desclasificada hace tiempo, y que describe algunos de los procesos fundamentales en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en la segunda mitad de siglo XX. Dentro de ese contexto y desde una perspectiva crítica, se retomarán los documentos publicados por el Departamento de Estado estadounidense, el Archivo de Seguridad Nacional y la CIA, que incluyen las discusiones, lineamientos y decisiones de funcionarios de Departamento de Estado, de Defensa, del Tesoro, de la CIA y de diferentes representantes del sector privado estadounidense con respecto a los gobiernos de Jacobo Arbenz (Guatemala, 1950-1954), Joao Goulart (Brasil, 1961-1964) y Salvador Allende (Chile, 1970-1973).

La política exterior estadounidense y América Latina en las primeras décadas de Guerra Fría

Por medio de la Doctrina Truman de 1947, el gobierno estadounidense declaró formalmente el inicio de una “Guerra Fría”¹ con el bloque comunista (la Unión Soviética y luego China), dando lugar al “orden bipolar” que legitimó la presión por parte de las potencias para lograr que los países pertenecientes a sus esferas de influencia aceptaran su alineación. Para “hacer funcionar” la bipolaridad, el gobierno estadounidense necesitaba financiamiento y medidas legales para dar forma a un nuevo Estado de Seguridad Nacional (Willis, 2010). Se llevó a cabo, entonces, una reforma institucional a nivel gubernamental, orientada específicamente a organizar la estrategia de seguridad nacional, que incluía asuntos internos y externos. Por medio de la Ley de Seguridad Nacional (*National Security Act*, 1947) se fundaron de la Agencia Nacional de Inteligencia (CIA) y el Consejo de Seguridad Nacional (*National Security Council*). En las discusiones y comunicados que promovieron la Ley, se planteaba la necesidad de crear una organización que permitiera actuar en el exterior por “medios clandestinos”,

¹ Cabe señalar que esta forma de conceptualizar el enfrentamiento entre capitalismo y comunismo, sugerido por Walter Lippmann, poco tiene que ver con lo sucedido en América Latina y otros espacios de la periferia, donde la guerra fue indudablemente caliente.

debido a que existía “información vital para la seguridad de Estados Unidos, que solo podía ser obtenida mediante operaciones encubiertas” (traducción propia. United States Department of State Founding of the National Intelligence Structure. August 1945-January 1946. Doc 26). De esta manera se “legalizaron” las acciones encubiertas (*black operations*) en tiempos de paz (incluidas las operaciones de “guerra psicológica”), y se crearon las instituciones pertinentes para llevar a cabo estas tareas, que, con el paso de los años, dieron muestras de ser sumamente efectivas no sólo para la “obtención de información” y la “contención del comunismo”, sino para la desestabilización de gobiernos que se oponían de una u otra manera a seguir los lineamientos estadounidenses en la Guerra Fría.

En relación a lo anterior, es fundamental recordar la finalidad y funcionalidad de la Guerra Fría, así como el sostén sobre el cual se erigió la nueva estructura estatal de seguridad. La base era el complejo industrial-militar como eje de la expansión del capitalismo monopólico de posguerra. Existen indicios para suponer que la economía estadounidense no se recuperó de la crisis del ‘30 por las medidas del gobierno de Roosevelt, sino gracias a la economía de guerra (Hobsbawm, 1999; Adams, 1976). Durante la contienda mundial, se generó una estrecha relación entre las empresas de armamentos y el Pentágono (Melman, 1972), lo que se complementó con una creciente influencia de los mandos militares en la toma de decisión a nivel gubernamental (Mills, 1978):

El complejo militar-industrial significa un grupo poco estructurado e informalmente definido de empresas que producen productos militares, oficiales militares de alta jerarquía y miembros de las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno federal, todos ellos unidos por las relaciones del mercado de la red de productos militares y con una ideología común en cuanto se refiere a mantenimiento y ampliación de las fuerzas armadas de Estados Unidos y de su papel en la política norteamericana” (Melman, 1972: 18)².

² Este proceso era legitimado desde la academia, junto con las posturas realistas. Un ejemplo son las ideas de Huntington: “Lo que se requiere de los líderes militares es un esfuerzo más para dar forma a un nuevo orden político. En muchas sociedades, la última posibilidad real de una institucionalización política que no caiga en el camino totalitario puede ser la oportunidad que tienen los militares para mostrarse políticamente creativos. Si los militares fracasan en aprovechar esa oportunidad, el incremento de la participación (popular) transformará a la sociedad en un sistema pretoriano de masas. En tal sistema la oportunidad para crear instituciones política pasa desde los militares, apóstoles del orden, a manos de esos otros líderes de la clase media, que son los apóstoles de la revolución” (Huntington en Tapia Valdés, 1980: 70).

De acuerdo con este planteo, ese complejo suponía una importante contribución al crecimiento y expansión de la economía estadounidense. Magdoff (1975: 81-82) exponía la importancia del negocio de las armas en lo relativo a los beneficios por ventas al exterior³, pero también en lo referido a la ocupación de la mano de obra (considerando que la desocupación había sido el gran problema de la depresión) (Sweezy y Magdoff, 1972: 72).

El gobierno de Truman lanzó un plan para reactivar la economía de Europa occidental (Plan Marshall), para reconstruir un mercado para las empresas estadounidenses (Pozzi, 2003) y también diseñó un programa de asistencia técnica para el desarrollo para los países “atrasados”, denominado Punto IV, un plan del cual casi no participó la región latinoamericana (Pollard, 1990). Pero con América Latina sí se avanzó en un acuerdo de seguridad mutua, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR 1947) que aceitó los vínculos militares a nivel panamericano⁴. Para inicios de 1950, comenzaron a implementarse Programas de Asistencia Militar (PAM), orientados a contener el avance del comunismo en el subcontinente (y a vender armas usadas de la segunda guerra y luego de la guerra de Corea) siguiendo los objetivos de la “seguridad hemisférica” (Veneroni, 1971).

Pero los acuerdos de seguridad y los programas militares no tenían como fin último evitarla “infiltración comunista” solamente, en tanto peligro potencial desde una perspectiva ideológica, también contaban con claros objetivos económicos ya que buscaban: garantizar el suministro de materias primas y materiales estratégicos para contribuir a sostener la economía estadounidense (lo que implicaba la imposición de “puertas abiertas” para ampliación de mercados e inversión). En el caso de América Latina, se definían las siguientes metas planteadas en la estrategia militar de Estados Unidos de acuerdo a los documentos desclasificados de la época:

³ “La ayuda militar de los Estados Unidos... desde 1945 ha ascendido en promedio a más de 2 mil millones por año. Llegó a los 5 mil millones en el año 1952 y cayó al nivel más bajo de 831 millones de dólares en el año 1956. El número de países receptores se elevó de 14 en el año 1950 a un pico de 69 en el año 1963. En total, unos 80 países han recibido una suma de 50 mil millones de dólares en ayuda militar desde la segunda guerra mundial hasta hoy [1969]” (Magdoff, 1975: 79-80).

⁴ Las bases del TIAR pueden rastrearse hasta inicios de la década de 1930, cuando Estados Unidos comienza a plantear la necesidad de lograr un acuerdo de defensa hemisférica, propósito que se plantea de modo sólido en la Conferencia de Chapultepec (1945) y que es sistematizado en el TIAR (1947) (Lieuwen, 1960: 233-241).

a) la continua y creciente producción y entrega de materiales estratégicos esenciales; b) si bien debe mantenerse un amplio espectro para el cambio político normal, el mantenimiento al interior de cada nación de la estabilidad política y la seguridad interna para garantizar la protección de instalaciones de las cuales dependen la producción y entrega de materiales estratégicos; (...) d) la protección de vías de comunicación vitales; e) la provisión, desarrollo, operación y protección de aquellas bases que puedan ser requeridas para el uso de Estados Unidos y para la protección de vías de comunicación; f) la protección coordinada de invasiones y redadas...(traducción propia. United States Department of State, 1950, US Policy regarding Hemisphere Defense, Vol I, 633, subrayado propio).

A nivel de discurso oficial, la política exterior estadounidense se postulaba como centrada en la “contención” de la expansión soviética (siguiendo en especial las sugerencias de George Kennan en el “Telegrama Largo”) para “salvar” al Occidente liberal y democrático. La contención pasó de ser “selectiva” con Truman, a “global” con el gobierno de Eisenhower (Insulza, 1982) y se jactaba de ser una estrategia de defensa, más que de ataque. Como sostiene Chomsky (2003:15) es usual que la política exterior estadounidense sea considerada como “defensiva” (postura desde la cual se definió la misma idea de contención), como una respuesta a la agresividad de otros superpoderes (como la URSS o China).

Sin embargo, en los documentos secretos se puede apreciar que la idea de “contención” poseía importantes tintes imperialistas. Un ejemplo del amplio espectro de la “contención” se encuentra en el documento “*top secret*” del Consejo de Seguridad Nacional N-68:

Nuestra política general, en este momento, debe ser descrita como diseñada para impulsar un ambiente mundial en el cual el sistema americano pueda sobrevivir y florecer (...) En lo que respecta a la política de contención, se trata de una política que busca por todos los medios, excepto la guerra: 1) bloquear el aumento de la expansión del poder soviético; 2) exponer las falsedades de las pretensiones soviéticas; 3) inducir a una retracción del control y la influencia del Kremlin; 4) en general, impulsar las semillas de destrucción del sistema soviético al punto de lograr modificar su comportamiento para que se adecue a los estándares generalmente aceptados a nivel internacional...” (traducción propia. The National Security Council, Paper N° 68, NSC-68 en Griffinth y Backer, 2001: 305-307).

Según Chomsky, en un análisis sobre la realidad de esos años, el discurso de la contención con respecto a la amenaza soviética fue utilizado para “shockear” a la población de modo que aceptara las medidas de intervención y de reconstrucción del capitalismo industrial de acuerdo con los intereses estadounidenses (2003: 22).

Pero esta no era exactamente la noción de “contención” elaborada por los académicos y funcionarios de la corriente “realista” de las relaciones internacionales, corriente que adquirió (no por casualidad) su auge, precisamente, con la Guerra Fría y el

estatus de Estados Unidos como “primus inter-pares”⁵. El concepto principal del realismo es “la razón de Estado”, que implica que el Estado es el actor principal de la política internacional y que es un actor racional; que el líder debe buscar poder; que se deben calcular racionalmente los costos para la supervivencia del Estado (Dunne y Schmidt, 2001: 141-161). A diferencia del liberalismo y sus variantes⁶ (la otra línea predominante en la política exterior estadounidense), el realismo sostiene que no existen principios universales, o más bien, que no existe una “moral universal”. La moral que debe seguirse es aquella dictada por el “interés nacional” que tiene como premisa la “autoconservación” del Estado, tal como lo expresaban Kennan, Morgenthau y Lippmann, los principales exponentes del realismo (Schlesinger, 1990).

La premisa del “interés del Estado” identificado con su autoconservación, en última instancia, permite la aplicación de una “doble moral” donde el Estado es capaz de sostener un estándar para los ciudadanos al interior de la frontera y un estándar para la política internacional, porque los asuntos internacionales obligan a los líderes a actuar en el exterior con acciones que pueden ser inaceptables para los ciudadanos del propio Estado (por ejemplo: matar, mentir, engañar) (Dunne y Schmidt, 2001). Por otra parte, a pesar del frecuente rechazo de la moral liberal por parte del realismo, la política exterior estadounidense utilizó también las premisas del liberalismo y especialmente las del internacionalismo liberal⁷ como la paz, la libertad y la democracia para lograr la legitimidad necesaria al interior de los Estados Unidos (para legalizar y financiar la Guerra Fría, tal como enunciamos más arriba) a los fines de sostener una guerra permanente contra el bloque soviético (Hoffmann, 1988; Schlesinger, 1990; Romano, 2011).

⁵ Ver Del Arenal, 1994; Barbé, 1995 y Hoffmann, 199.1

⁶ Una de las tantas clasificaciones es: Internacionalismo liberal, institucionalismo, institucionalismo liberal (Dunne, 2001)

⁷ Esta corriente se asocia a los postulados de W. Wilson (1913-1925), que pueden sintetizarse del siguiente modo: los Estados estarían mejor formados en caso de que pudieran ser autónomos y democráticos; un mundo políticamente plural estaría predispuesto a ser abierto en lo económico; un orden mundial anti-imperialista, económicamente interdependiente y políticamente plural necesitaba de la creación de organizaciones internacionales sin precedente en la historia que tuvieran como principal objetivo el mantener la paz (Smith, 1999: 174).

Lo que interesa destacar es que, más allá de las diferencias que puedan marcarse entre realismo y liberalismo, no se cuestiona el sistema capitalista y su modo de “organizar” la economía, la sociedad y la política en “propietarios y no propietarios”, pues el análisis de la política exterior aparece como aislado de la estructura económica y social. En cambio, desde planteos vinculados al marxismo, la política exterior no puede ser analizada como una dimensión aislada de la economía, la política y la ideología. Precisamente, con respecto a la política exterior estadounidense de posguerra, el eje de discusión de las escuelas críticas en general fue que los lineamientos de dicha política eran esencialmente imperialistas, pues se trataba de expandir la economía y el modo de vida americano (*american way of life*) por medio de la injerencia en asuntos internos de otros países. En este punto, interesa retomar brevemente dos discusiones: lo relativo a la toma de decisión en la política exterior estadounidense y lo relativo a la definición de imperialismo.

Con respecto a la toma de decisión, desde los trabajos de Gaddis (1989, 2003) hasta los análisis de Schlesinger (1990) se destaca la importancia de los posibles malentendidos entre funcionarios al interior del gobierno estadounidense así como las frecuentes disputas burocráticas, en el marco de una visión de la Guerra Fría como resultado de un “dilema” en el cual cada potencia percibía como “amenazante para su seguridad” las actitudes o acciones de la otra potencia. Esto se complementa, a la vez, con el supuesto de que no siempre se encuentran los sujetos más idóneos en la toma de decisión, y que en contextos de crisis, las limitaciones de tiempo, el estrés y la rigidez cognitiva de los líderes y sus asesores definen en gran medida la toma de decisión (Holsti, [1979] 1999). Sin dudas, uno de los trabajos clásicos de la toma de decisión en la política exterior estadounidense en medio de la Guerra Fría es el de Allison sobre la crisis de los misiles, que inició una corriente de estudios que abordan en detalle el proceso de toma de decisión atendiendo a la dimensión grupal o individual y su “impacto” en la decisión.⁸

A pesar de los importantes aportes de tales estudios, el análisis centrado en la toma de decisión en sí misma corre el riesgo de aislar esta dimensión de la economía política,

⁸ Ver, a modo de ejemplo: Hermann, Stein, Sundelius y Walter (2001) y Hermann, Preston, Korany y Shaw (2001).

es decir que no tiene en cuenta el modo en que se relaciona la toma de decisión con la estructura económica y la consiguiente estructura social de poder⁹. Es por ello que en este escrito no interesa tanto el proceso de decisión en sí mismo, sino más bien lo que va implicado en dicho proceso, como lo planteaba Wright Mills (1978): lo que importa es hacer visible la red de poder que se genera en el marco de una determinada estructura histórica (el sistema capitalista) a través de grupos e instituciones y sujetos influyentes en la toma de decisión. La idea de red rompe con la separación creada desde el liberalismo entre los “intereses privados” y los “intereses públicos”, que tiene como correlato la división de la sociedad en tres dimensiones: el Estado, la sociedad civil y el mercado (Cohen y Arato, 1994). Desde una postura crítica, se cuestiona esta supuesta separación entre Estado y mercado, entre lo privado y lo público (Meiksins Wood, 2000).

Con respecto a la discusión sobre el imperialismo, es fundamental recordar que desde la visión realista, sí se percibían tendencias imperialistas en la política exterior estadounidense¹⁰, pero que de ningún modo se asociaban a cuestiones económicas sino que se debía a decisiones del sector militar, político y a la presión de los publicistas (Schlesinger, 1990: 170-171). Nada tenían que ver estos con los intereses del empresariado, “pues no es la dinámica del capitalismo, sino la del poder la que produce el imperialismo” (Ibid, 171)¹¹. Desde este punto de vista, el poder puede ser conceptualizado y comprendido por fuera de la estructura económica, al igual que la “seguridad” (Ibidem, 164).

⁹ Si bien existe la aproximación a la toma de decisión que toma como punto de partida diferentes niveles de análisis, incluido el sistémico, pero plantea como punto de partida un sistema de Estados horizontal e interdependiente (Rourke, 2005).

¹⁰ Morgenthau (1986) sostiene que, en realidad, el Estado norteamericano no fue “racional” debido a su tendencia imperialista, la cual en lugar de llevarlo a realizar “alianzas”, lo llevó a incrementar el gasto armamentista y a posicionar, en muchas ocasiones lo militar por encima de lo político. Ciertamente, como ya se ha mencionado, fueron las premisas del liberalismo internacionalista (como el discurso de la democracia y los organismos internacionales) las que buscaron otorgar legitimidad al accionar del gobierno estadounidense. No obstante, los realistas brindaron los elementos para concretar esta política, por ejemplo, a través del uso de la fuerza, sumado a que, en general, tendieron a prevalecer los “intereses nacionales” (la seguridad nacional) por sobre los “ideales nacionales” destacados por los idealistas.

¹¹ Otra de las visiones sobre imperialismo es la planteada por Schumpeter que sostenía la idea de “imperialismo como atavismo social” que no estaba vinculado al capitalismo, sino que más bien daba cuenta de las reminiscencias del antiguo régimen todavía presentes en el capitalismo de inicios del siglo XX. Desde la visión de Schumpeter, a diferencia de lo sostenido por Lenin, el capitalismo estaba destinado a evitar las guerras y con ello, contener las ansias imperialistas, como lo demostraba el caso estadounidense (Schumpeter [1919] 1951).

A diferencia de tal postura, desde una perspectiva crítica, se asume que lo político, lo económico y lo militar son difícilmente separables pues en conjunto conforman la política exterior, además de partir de la base de que Estados Unidos era el eje de la expansión del sistema capitalista monopólico de posguerra, lo que implicaba “prácticas imperiales”¹². Esta tesis planteada a inicios del siglo XX por Luxemburgo y Lenin, fue retomada y profundizada por el neomarxismo, la corriente del imperialismo estadounidense (asociada a los estudios “revisionistas” durante la Guerra Fría, como los de Kolko) y los postulados de la escuela de la dependencia. Estas escuelas, a la vez que recuperan aspectos fundamentales del marxismo, cuestionan su percepción acerca de la periferia y analizan los mecanismos políticos, económicos y militares que se articulan para garantizar la reproducción del capitalismo en la periferia¹³. En la siguiente definición de imperialismo proporcionada por Sweezy (1973), se articulan claramente los postulados de estas tres corrientes:

El impacto económico del imperialismo en el país atrasado puede resumirse así: (a) explotación, por parte del capital extranjero, de los recursos naturales del país, a menudo por los más modernos métodos de acción en gran escala pero afectando en forma directa solo a un reducido porcentaje de los habitantes; (b) creación de una red de transporte, pero con miras a conducir las cosas fuera del país, no hacia su propia población; (c) estancamiento de la industria y quiebra de los artesanos; y (d) sostenido deterioro de la agricultura (1975: 15-16)

En este esquema, “la dependencia condiciona no sólo lo económico sino la estructura social y política” (Johnson, 1970: 114). Así, se entiende por “sistema internacional” aquello de lo que dependen los países latinoamericanos, organizado en una estructura de instituciones y de clases de acuerdo al poder, en el seno del cual se da la dinámica del “imperialismo”: un sistema institucionalizado de control que sistemáticamente moldea las instituciones y estructuras de países dominados y limita su libertad de acción” (Ibid.). Este señalamiento es importante porque en los casos que se abordarán a continuación se muestra el modo en que se presionó e intervino (incluso por

¹² Esta postura parece implicar un distanciamiento con respecto a algunos aportes bastante recientes que plantean la necesidad de desmitificar la bipolaridad y de atender a cuestiones sociales y culturales implicadas en la guerra fría, sobre todo cuando es estudiada desde el Tercer Mundo (Dominguez, 2000; Joseph, 2004; Katz, 2004; Saull, 2004; Gleijeses, 1991; Grandin, 2004, etc.). Si bien estas lecturas no suelen centrarse en una visión de economía política de las relaciones internacionales, sí plantean en mayor o menor medida una crítica a la política intervencionista y la expansión de la economía estadounidense como motor de dicho intervencionismo.

¹³ Ver: Williams (1960); Kolko (1968); LaFeber (1999); Leffler (1999), Chomsky ([1984]2003); Sweezy (1973) Baran y Sweezy (1974), Sweezy y Magdoff (1972), Dos Santos (1975), Sunkel (1975); Fernandes (2008), Gunder Frank (1970), Johnson (1970); Cardoso y Faletto (1973); Saxe Fernandez (1974), Stockes (2003).

medio de organismos interamericanos) en aquellos Estados cuyos gobiernos se oponían a seguir los lineamientos planteados desde Estados Unidos. También en estos casos veremos que la imbricación de lo privado y lo público en las “economías nacionales” cobró evidencia, precisamente, a través del avance del capital monopólico por medio de las empresas transnacionales, respaldado por el gobierno estadounidense y el complejo militar-industrial sobre el cual descansaba su estructura económica y política (Mills, 1978; Mellman, 1972; Barnett, 1974; Baran y Sweezy, 1974).

A su vez, la expansión del capitalismo monopólico a través del capital multinacional potenció las relaciones de dependencia entre la élite del centro y la clase dominante de la periferia (Sunkel, 1975; Fernández, 1979 y 2008). Este es un punto fundamental, pues como bien advertía Cardoza y Aragón (1955) en sus reflexiones sobre el derrocamiento de Arbenz en Guatemala, el imperialismo “opera desde adentro”, haciéndose efectivo gracias al conflicto de clases interno y consolidado por la creciente dependencia económica y política de estas clases con la elite de Estados Unidos.

De esta forma, la dependencia parecería no reducirse a lo económico sino que es una condición estructural que se percibe desde la conformación misma de los Estado Nación en América Latina, pues las minorías “criollas”, que buscaban emanciparse de la metrópoli en términos político-administrativos, no tenían como objetivo acabar con las relaciones desiguales (especialmente en términos económicos) con los países europeos y luego con los Estados Unidos. La posible razón de esta paradoja es que la desvinculación hubiera implicado la pérdida del estatus político y económico preservado gracias a los lazos de dependencia con las elites de las metrópolis. Así, en América Latina, “el Estado surge como un instrumento de excelencia de la dominación burguesa que explica las limitaciones de su eficacia: sus metas son egoístas y particularistas y son raras las coincidencias que convierten ‘lo que interesa a ese grupo’ en algo relevante para toda la Nación. En tales circunstancias, la dominación burguesa no es útil ni para llevar a cabo la revolución nacional (a causa de sus conexiones estructurales y dinámicas con las burguesías de las naciones capitalistas hegemónicas y con el capitalismo internacional) ni para promover la democratización de la riqueza, del prestigio social y del poder” (Fernandes, 1979: 29-30). Esta estructura se vio amenazada

en diferentes momentos de la historia de América Latina, siendo las experiencias de los gobiernos de Arbenz, Goulart y Allende, algunos de los procesos que intentaron romper en mayor o menor medida con esta dinámica.

Todo lo expuesto hasta aquí lleva a pensar que la abstracción de “relaciones internacionales”, en los hechos, se materializa en relaciones entre elites (minorías privilegiadas con mayor influencia o acceso directo a la toma de decisión)¹⁴, que bajo la fachada de supuestos “intereses nacionales” esbozaban (con mayor o menor precisión) una determinada política interna y externa: “en sociedades de capitalismo moderno como la nuestra [la estadounidense] la toma de decisión tanto a nivel político como económico, está dominada por el sector privado, por el sector de los negocios” (Chomsky ([1984]2003: 5).

Ahora bien, esta confluencia de intereses entre los miembros de la cúpula de la clase dominante, no implicaba la ausencia de tensiones al interior de cada gobierno, entre las diferentes agencias y sectores¹⁵. No obstante, específicamente en el caso del gobierno estadounidense, existían una serie de objetivos comunes con respecto a América Latina, orientados a garantizar el suministro de materias primas y recursos estratégicos que podía ser amenazado por el avance del comunismo, aunque hubiera diferencias en el modo de concretar esta meta. Este objetivo común adquirió mayor solidez aún luego de la Revolución Cubana. Seguidamente, entonces, realizaremos una revisión histórica del derrocamiento de los gobiernos de Arbenz, Goulart y Allende, en tanto procesos en los que el gobierno estadounidense aparece vinculado de modo directo o indirecto.

El derrocamiento de Jacobo Arbenz

El derrocamiento de Arbenz fue fundamental tanto para la política exterior estadounidense y el paso de la doctrina de seguridad hemisférica a la doctrina de seguridad interna, como para las experiencias nacionalistas en América Latina.

¹⁴ La definición de “elite del poder” es de Wright Mills (1978), que trabaja el concepto en especial para dar cuenta de los grupos influyentes en la toma de decisión a nivel nacional y el modo en que se construye la red de poder. También nos centramos en los aportes de Miliband (1970) que articula la definición de elite con la de clase dominante, recuperando la visión marxista.

¹⁵ No postulamos que los gobiernos no tengan ningún tipo de autonomía en la toma de decisiones, lo que sostenemos es que los gobiernos estaban conformados o fuertemente influenciados por minorías vinculadas al poder económico, político y militar.

Considerando los objetivos de Estados Unidos para América Latina en el marco de la Guerra Fría, gobiernos como el de Jacobo Arbenz (1951-1954) en Guatemala se presentaban como una amenaza a la seguridad hemisférica, pues las acciones de regulación del capital extranjero y de reforma agraria eran consideradas causantes de “inestabilidad” e indicios de infiltración comunista (o acciones que podían favorecer dicha infiltración).

Esto se entiende cuando se consideran los principales objetivos del gobierno estadounidense para la región, centrados en la obtención de materiales estratégicos y materias primas y en la expansión del capital privado. Eisenhower “temía el resurgimiento del nacionalismo en países en desarrollo por hallarse este estrechamente ligado al socialismo” (Rabe, 1988: 30). Esta percepción se distanciaba bastante de lo que en realidad sucedía, pues los partidos comunistas, en general, tuvieron que renunciar a su ortodoxia para asociarse a los partidos/movimientos nacionalistas que eran los que tenían mayor capacidad y posibilidades de acceder a la esfera política formal mediante elecciones (González Casanova, 1979). La tensión entre el gobierno democrático de Arbenz y el gobierno estadounidense, llevó al Secretario de Estado de Eisenhower, Dulles, a aseverar que en América Latina era inminente garantizar la estabilidad, antes que la democracia (Rabe, 1988: 39).

Desde esta perspectiva es que el gobierno estadounidense acusó a Arbenz de promover el comunismo en la región (Mecham, 1961: 437). La gran prueba de la “infiltración” del comunismo en Guatemala eran los conflictos de Arbenz con la United Fruit Company (UFCO), debido a la expropiación de tierras de esta empresa. Las tensiones con esta compañía (una de las más grandes de Estados Unidos en ese entonces [Mecham, 1961: 439]) se habían gestado durante la presidencia de José Arévalo (1945-1951), cuando entró en vigencia el Código de Trabajo que regulaba las relaciones entre patrón y obrero por primera vez en la historia guatemalteca y que ponía ciertas trabas al “normal funcionamiento” de la UFCO. Vale señalar que esta empresa era uno de los monopolios de mayor poder en América Central. En Guatemala, era dueña de todos los ferrocarriles y del puerto de Barrio, el más importante del país, mientras en la región,

La UFCO que conduce grandes operaciones en nueve países latinoamericanos, domina la producción de banana. La compañía controla el único sistema de transportes efectivo, la *International Railways Central America*. A través de su flota mercante, la compañía tiene un monopolio virtual del tráfico marítimo guatemalteco. Es dueña o alquila grandes extensiones de

tierras en Guatemala, y es la segunda empleadora de mano de obra después del gobierno”. (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV. Doc. 3. National Intelligence Estimate).

Estos pocos datos dan cuenta de la envergadura de los intereses privados en juego (Rabe, 1988) y el poder de esta empresa, los cuales se tradujeron en su enorme influencia en la toma de decisión al interior del gobierno estadounidense.

Las acciones “amenazantes” del gobierno de Guatemala, llegaron a su punto culmine el 26 de febrero de 1953, cuando Arbenz firmó una orden del Consejo Nacional Agrario de Guatemala para la expropiación bajo previsión de la Ley de Reforma Agraria del 17 de junio, de aproximadamente 234 000 acres de la UFC, ofreciendo bonos de compensación a la empresa. La UFCO acudió al gobierno estadounidense para solicitar que salvaguardara sus intereses. En realidad, no es que la empresa “acudiera” en busca de apoyo, sino que, por un lado, el gobierno de Eisenhower se había comprometido a impulsar el capital privado (Loayza, 2008) y, por otro lado, varios funcionarios de alto rango tenían acciones o habían ocupado cargos ejecutivos en la UFCO y sus subsidiarias (Schlesinger y Kinzer, 1987; McCann, 1976)¹⁶.

Ante la presión de la UFCO, el gobierno de Estados Unidos consideró que el pago diferido de las tierras expropiadas en forma de bonos agrarios no constituía una compensación adecuada para la empresa, además de ser inadecuado el monto, en orden a los principios de las leyes internacionales al respecto. El gobierno de Guatemala replicó que las extensiones expropiadas correspondían a tierras improductivas, que no generaban ningún beneficio a la compañía (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV. Doc. 13 Editorial Note).

La alianza entre el gobierno de Estados Unidos y la UFCO, se evidenciaba en el rol que los funcionarios y el gobierno estadounidense asignaban a esa empresa: “el desarrollo político futuro depende de la relación del gobierno de Guatemala con la

¹⁶ En el caso de la relación UFCO-gobierno estadounidense se visualiza de modo bastante claro la vinculación entre la cúpula de la clase política y del empresariado estadounidense y de Guatemala, además de ponerse en evidencia el proceso de “*revolving door*” (puerta giratoria) por medio del cual los funcionarios públicos de alto rango pasan a ocupar cargos ejecutivos en las grandes corporaciones y viceversa. Esto no significa que la persona que pasa de una institución a otra condicione las políticas y decisiones de uno u otro espacio según los intereses del lugar del que proviene, pero sí asegura una sólida red entre sector privado y sector público (esto lo analizan especialmente McCann, 1976).

United Fruit”, a la vez que concebían como “intercambiables” los intereses de Estados Unidos y los de sus grandes empresas: “es probable que el gobierno [de Arbenz] y los sindicatos, bajo influencia comunista y alentados por el nacionalismo, ejerzan crecientes presiones en otros intereses de los Estados Unidos [como la UFC], especialmente a la Railway”.

El argumento clave para autorizar la intervención era que “la situación en Guatemala afecta la seguridad de los Estados Unidos” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV. Doc. 3). Lo mismo se puso de manifiesto a nivel de la formalidad en las negociaciones cuando, ante conflictos con empresas estadounidenses (como la UFCO) el gobierno estadounidense solicitó al Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Guillermo Torriello, “que hiciera algún arreglo con representantes de la UFCO, *o bien*, que se llevara a cabo una negociación entre gobiernos” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV.Doc. 13, las cursivas son nuestras), con lo cual se entiende que la negociación con la empresa se hallaba al mismo nivel que la negociación entre gobiernos. Es por ello que no sorprende que el gobierno estadounidense –ante las negativas de Arbenz– presentara “una queja formal en contra de Guatemala, *en nombre* de la UFCO, por el apoderamiento de tierras que tenía la compañía en Tiquisate” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV.Doc. 13, las cursivas son nuestras).

Para sintetizar la vinculación entre la toma de decisión a nivel del gobierno de Estados Unidos –aunque no sin tensiones internas– y los intereses de las grandes empresas, retomamos la siguiente afirmación:

El principal problema que enfrenta el gobierno de Estados Unidos en Guatemala es con relación a los intereses privados estadounidenses. Influenciado por comunistas y nacionalistas, el gobierno de Guatemala comenzó la expropiación de importantes propiedades estadounidenses, habiendo implementado una política hostil con respecto a las empresas estadounidenses por varios años, todas ellas con vastos intereses en dicho país (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV Doc. 17. Draft Policy Paper Prepared in the Bureau of Inter-American Affairs).

Además, se dejaba en claro que “las principales víctimas de la reforma agraria serían los terratenientes de Guatemala y la UFCO” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV. Doc. 15. National Intelligence Estimate).

Esta postura reforzaba la tesis acerca de la amenaza del comunismo internacional en Guatemala, lo cual permitía justificar la intervención del gobierno estadounidense (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations, 1952-1954, vol IV, Doc. 3). Se argumentaba, por ejemplo, que: “en Guatemala, el comunismo ha alcanzado la posición más fuerte de toda América Latina, y ahora está avanzado en un programa que amenaza a importantes empresas comerciales americanas en aquel país y puede llegar a afectar la estabilidad de los gobiernos vecinos. La continuidad de la tendencia actual en Guatemala terminará poniendo en peligro la unidad del Hemisferio Occidental en contra de la agresión soviética, y la seguridad de nuestra posición estratégica en el Caribe, incluyendo el Canal de Panamá” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV Doc. 17).

El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala aseguró que el tipo de acusaciones sostenidas y divulgadas en el Norte estaban dirigidas a convencer a los demás países del continente sobre la necesidad y conveniencia de intervenir en los asuntos internos de cualquier Estado que implementara políticas de desarrollo nacional, aún sin estar bajo el ideario comunista (Slater, 1967: 118-119). A estas declaraciones oficiales, se sumaban las quejas con respecto a la permanente presión estadounidense, que Arbenz elevó a las Naciones Unidas.

Para evitar mayores suspicacias a nivel de la opinión pública internacional –y a la vez asegurar la intervención en Guatemala–, el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo una “política de dos vías” (Wood, 1985: 162). La primera consistía en la organización de una operación encubierta organizada por la Central Intelligence Agency (CIA) orientada a apoyar a los rebeldes liderados por el militar Castillo Armas (opositor al gobierno en turno), a los sectores disidentes internos (Jonas, 1979; Grandin, 2004) así como grupos opositores en países vecinos. La segunda vía, era la que debía transitarse a través de la Organización de los Estados Americanos, es decir, la alternativa de discutir a nivel interamericano y decidir “multilateralmente” las acciones sobre Guatemala. Esta vía se materializó en la “X Conferencia Interamericana” realizada en marzo de 1954 en Caracas, donde el sistema interamericano devino en una alianza anticomunista, sentando un precedente para la historia posterior en América Latina, como lo sostuvo luego el ex presidente Arévalo: “Las grandes naciones sudamericanas que están atadas por

discutibles compromisos jurídicos internacionales para asistir ‘sin excusa’ a las llamadas ‘Conferencias Panamericanas’, corren el peligro de que de hoy en adelante, con base en los gobiernos títeres que los Estados Unidos han sabido colocar en los países del Caribe, tengan que someterse a la triquiñuela de las votaciones “mayoritarias” que por lo visto jamás estarán en contra de los intereses de Estados Unidos” (Arévalo, 1954: 86).¹⁷

Mientras tanto, con respecto a los disidentes internos, el Departamento de Estado estimaba que el potencial anticomunista en Guatemala estaba constituido por las fuerzas armadas; la jerarquía eclesiástica; los terratenientes y hombres de negocios; el sector ferroviario anticomunista; una parte importante de estudiantes universitarios (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV. Doc. 15). Con respecto a los segundos, se planteaba como clave en la política de intervención militar mejorar los acuerdos con Honduras, Nicaragua y El Salvador y apoyar con armas, material y asistencia militar en general (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV. Doc.16. Memorandum by the Officer in Charge of Central America and Panama Affairs (Leddy) to the Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Cabot).

Ambas vías de acción se complementaban con mecanismos de presión económica centrada en decisiones financieras o en el precio de bienes primarios para crear un clima de inestabilidad. Desde esta perspectiva se acordó que: “1) no se le dará asistencia prioritaria a Guatemala; 2) las cuotas de materiales que se hallan bajo el régimen de restricciones cuantitativas serán recortadas; 3) en el caso de las exportaciones de productos carentes de restricciones cuantitativas, se consultará con el Departamento de Estado y la embajada, si hubiere algunos aspectos particulares que pudieran generar un efecto palanca” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV. Doc.8. Memorandum of Conversation, by the Acting Officer in Charge of Central America and Panama Affairs). Una estrategia que no alcanzaba a las empresas estadounidenses operando en el país, tal como lo había

¹⁷ Esta crítica realizada en aquel momento adquiere enorme actualidad debido al proyecto de la conformación de un organismo interamericano sin Estados Unidos y Canadá ver: <http://www.eluniversal.com.mx/nacion/175826.html>

señalado el embajador norteamericano Schoenfeld (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV. Doc.8).

Pero no debe olvidarse que, más allá de las presiones económicas el objetivo era la desestabilización y la consiguiente intervención militar, para lo cual se estaba llevando a cabo un trabajo rápido y eficaz, según lo expresaba un memorando de octubre de 1952: “1) un plan militar en contra de Guatemala ya ha sido formulado; 2) se necesita solamente un líder para poner el plan en acción; 3) se espera implementar el plan este año; 4) todos los elementos involucrados esperan ‘luz verde’ y un apoyo importante en armas” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Vol. IV 6. Memorandum by the Deputy Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Mann) to the Secretary of State).

La intervención militar directa debía ser más o menos legítima, por lo que se hacía necesaria alguna “justificación”, por eso el operativo encubierto de la CIA funcionó especialmente en el plano de la “guerra psicológica”, es decir, a través de propaganda en prensa gráfica y radios de Guatemala y Estados Unidos, promoviendo una imagen de inestabilidad y denunciando las prácticas comunistas del gobierno de Arbenz (Cullather, 2006), mientras se apoyaba la estrategia militar del opositor Castillo Armas en su objetivo de derrocar al presidente (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations, 1952-1954, vol IV, doc. 6)¹⁸. El golpe de Estado fue favorecido por las condiciones internas de Guatemala, particularmente, los conflictos y luchas de los diferentes sectores a partir de la reforma agraria, que implicó un cambio rotundo en las estructuras socioeconómicas con la incorporación del indio campesino como propietario; cuestión rechazada especialmente por los ladinos (criollos). La lucha de poder entre los estratos más bajos y la oposición de la clase media a medidas redistributivas, permiten pensar en la hegemonía de la gran burguesía local (atada a los intereses extranjeros), incluido el ejército, en la definición del “interés nacional”.

Es así que el imperialismo operó desde adentro, legitimado por buena parte de la población guatemalteca, y especialmente por el ejército, que era el sector clave tanto

¹⁸En documentos desclasificados en 1997, puede leerse claramente el apoyo de este organismo norteamericano al líder Castillo Armas en la perpetración del golpe de Estado a Arbenz el 16 de junio de 1954, y en el plan de persecución a comunistas guatemaltecos (The National Security Archive. CIA and the Guatemala Assassinations Proposals 1952-1954).

para provocar la inestabilidad total como para evitarla. Como lo sostenía Cardoza y Aragón:

De hecho, los militares tienen hoy el control de la mayor parte de nuestros países, en forma dictatorial. Y por medio de ellos, los Estados Unidos ya no necesitan desembarcar marinos: son su policía que cuida los monopolios y la línea política interna e internacional. Esos militares se especializan en poner la etiqueta del señalamiento como enemigo: ‘comunista’ (...) Dólares, cruz y espada. La burguesía de América vive en gran parte condicionada por la enorme presión norteamericana y por la identificación antipatriótica de sus intereses con los extranjeros” (1955: 49-50).

Del lado de Estados Unidos, el éxito del operativo de la CIA, la implantación de un gobierno militar y el apoyo a sectores civiles opositores al gobierno de turno sentaron las bases de la dinámica de estabilización-desestabilización¹⁹ que justificó la permanente intervención abierta o encubierta de Estados Unidos en Guatemala, así como en diferentes países de América Latina.

A partir del derrocamiento de Arbenz se sucedieron en Guatemala una serie de gobiernos militares y cívico militares que implementaron doctrinas de contrainsurgencia luego canonizada en la Doctrina de Seguridad Nacional que legalizó el terrorismo de Estado primero y la guerra de baja intensidad en la década de 1980 (Jonás, 1979, 1991; Blum, 1995). El espiral de violencia pervive hasta la actualidad, siendo Guatemala uno de los países más pobres y más violentos de América Latina (UNDP-OEA 2010; World Bank, 2010).

El derrocamiento de Joao Goulart en Brasil

La revolución cubana marcó un punto de quiebre en la retórica del gobierno estadounidense hacia América Latina. En sus últimos años de gobierno, la administración Eisenhower asumió que la política de apoyo incondicional al capital privado no había generado un mayor desarrollo en la región y que entonces había que plantear mecanismos de asistencia desde el Estado (Rabe, 1988). Una nueva estrategia fue implementada por su sucesor, J. F. Kennedy, con el programa de la Alianza para el Progreso (1961) y que consistía en una serie de lineamientos para contribuir con el desarrollo económico y social de América Latina, pues se consideraba que la pobreza

¹⁹ A propósito de esta dinámica ver: Delgado y Romano (2011).

era la que generaba inestabilidad y con ella, el terreno propicio para la infiltración comunista. En el marco de esta “nueva política”, se llevó a cabo el derrocamiento de Goulart en Brasil, “justificado” (al igual que el golpe contra Arbenz) por la inclinación comunista de este gobierno.

Luego de la renuncia del presidente brasileño Janio Quadros (enero-agosto 1961), asumió la presidencia el ex-vicepresidente Joao Goulart (1961-1964), situación que generó preocupación en los sectores conservadores de las principales ciudades debido a que provenía del PTB (*Partido Trabalhista Brasileiro*), y contaba con el apoyo del sindicalismo, del ala nacionalista del ejército y de amplios sectores de la población. El plan de acción del nuevo presidente se centraba en el desarrollo económico-social mediante medidas redistributivas, en la expropiación de compañías extranjeras, la alfabetización masiva, etc. De hecho, fue Celso Furtado quién diseñó el primer plan trienal de desarrollo. Estos planes incluían proyectos como el de la *Superintendencia do Desenvolvimento do Noroeste* (SUDENE) que atendían en especial a la situación crítica del Nordeste brasileño, la zona más pobre del país.

La llegada de Goulart implicó un deterioro de las relaciones con Estados Unidos, que aumentaron con la negativa de la gestión brasileña a imponer sanciones contra Cuba en la Conferencia de la OEA llevada a cabo en Punta del Este, en 1962 (Rapoport y Laufer, 2000). A esto se sumó el desinterés de Goulart por atender a los “consejos de reforma democrática” propuestos por el gobierno norteamericano (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1964-1968 Vol. XXXI. Doc. 208). Esta conducta (además de la tendencia político-ideológica de Goulart) llevó al gobierno estadounidense a definir al presidente de Brasil como un “irresponsable” (Traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1964-1968, Vol. XXXI. Doc. 2).

Por otro lado, propuestas como la de expropiar bienes a empresas estadounidense profundizaron las tensiones mientras se multiplicaban las medidas. Siguiendo el programa propuesto, Goulart nacionalizó los siete distribuidores de petróleo del país a la vez que se inició una de las reformas agrarias más serias a nivel nacional (Leguizamón, 1985: 79-80). En una de las conversaciones documentadas de Goulart con el embajador de Estados Unidos en Brasil, Lincoln Gordon, el presidente enunció

algunos problemas con respecto a la subsidiaria de la American And Foreign Power Company (AMFORP) en Vitória, y sugirió que la responsabilidad por esa empresa sería trasladada al Estado (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations 1964-1968, Vol XXXI Doc. 183. Telegram From the Embassy in Brazil to the Department of State).

En agosto de 1962 se sancionó una ley que conminaba a las compañías extranjeras a limitar sus remesas de ganancias al 10 por ciento del capital invertido en Brasil, a la vez que establecía que la reinversión de dichas ganancias no sería considerada como capital nuevo (Laguizamón, 1985: 78). Una cuestión que tenía claras consecuencias económicas para la vasta inversión estadounidense en el país: según un informe del año 1962 de la Cámara de Comercio brasileña, había instaladas en Brasil 24 grandes empresas industriales estadounidenses que empleaban a más de 61 mil personas y aportaban 20.5 mil millones de cruzeiros al año en pago de impuestos (Gordon, 1963: 91-92).

Ante esta situación, el gobierno de Goulart se transformó en uno de los principales problemas para el gobierno de Kennedy, que preveía un inminente “deterioro” de la situación de Brasil, previsión no sólo basada en “estimaciones”, sino en la presión económica ejercida de hecho por Estados Unidos por medio del recorte de créditos y la acción directa a través de operaciones encubiertas (Moniz Bandeira, 2004: 329-330).

La situación llegó a su punto de quiebre cuando, en ocasión de un acto político a fines de 1963, Goulart firmó un decreto para expropiar las refinerías de petróleo extranjeras, y al día siguiente convocó al Congreso a firmar una medida destinada al control de las rentas, a la vez que impulsó la legalización del Partido Comunista. Estas medidas, “alarmaron a la mayoría, sino a toda la comunidad de negocios estadounidense”. Además, este nuevo paso dado por Goulart, habilitó a Lincoln Gordon (uno de los principal promotores del golpe militar) a asegurar que la situación empeoraba día a día, dando cuenta de “la presencia de elementos muy peligros no vigentes con anterioridad” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations 1964-1968, Vol XXXI. Doc. 184. Telegram from the Embassy in Brazil to the Department of State).

La preocupación se tradujo en el envío de algunos funcionarios estadounidenses para dialogar con el sector de negocios brasileño. Se reunieron con grupos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Río de Janeiro y San Pablo, y con buena parte de los hombres de negocios y banqueros importantes de Brasil y Estados Unidos; asimismo, tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones con los gerentes de la American Foreign Power y la Brazilian Light and Power, que constituían uno de los objetivos de nacionalización del gobierno de Goulart (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc. 227)²⁰.

Las conversaciones se plasmaron en las recomendaciones realizadas en ocasión de una de las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, especialmente en lo relativo a la política de asistencia estadounidense a Brasil, aspecto fundamental en el programa trienal de Celso Furtado. Para recibir tal asistencia, una condición inicial era que el gobierno de Goulart “llegara a un acuerdo satisfactorio con la IT&T, que corrigiera los defectos de la ley de remesas, que demostrara un apoyo público a los programas de la Alianza para el Progreso y que tomara las medidas necesarias para la estabilización económica y financiera” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc.230). Asimismo, en las recomendaciones se señalaba la necesidad de “mantener un clima favorable en Brasil para las inversiones estadounidenses, y para asegurar la máxima participación de capital norteamericano en los programas de la Alianza para el Progreso implementados en Brasil” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc. 233). Teniendo en cuenta lo anterior, se comprende mejor por qué la “estabilización y el saneamiento” de la economía y del sector financiero brasileño constituían las principales recomendaciones y demandas del gobierno estadounidense (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc. 227). A su vez, la estabilidad se consideraba como un requisito básico para lograr una “economía moderna y competitiva que pudiera conformar una base sólida para la democracia en una nación que probablemente devendrá en potencia mundial”

²⁰ Finalmente, el gobierno brasileño cumplió con el requisito de negociar un buen monto para las expropiaciones de la IT&T y la AMFORP (Traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc. 230), aunque esto no fue suficiente para que Estados Unidos renunciara a apoyar a la oposición en las acciones orientadas a la desestabilización del gobierno de Goulart.

(traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc. 233).

En orden a tales premisas, preocupaba a los funcionarios del gobierno estadounidense la “terrible situación económica” que agobiaba a Brasil, asegurando que la inflación había alcanzado un 80% el año anterior y que las perspectivas para el año en curso eran peores, acompañadas por una estanflación que no se vivía desde los 30, que obedecía en parte a la “disminución en las inversiones extranjeras” (en orden a la “desafortunada” ley sobre remisión de ganancias) y por la reducción de las inversiones locales (debido a la inflación y a la falta de perspectivas). El único “punto a favor” era el comercio exterior, pero eso se debía al buen precio que había alcanzado el café” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations 1964-1968. Vol. XXXI. Doc. 185).

A esta “crítica situación económica” se sumaba una “dramática” situación política. Según los documentos desclasificados: “La única cuestión peor que la situación económica, es la situación política. Goulart es un *incompetente*, un delincuente juvenil que representa a la minoría de los brasileños. Sobrevivirá a duras penas a la corta. A la larga, probablemente intentará una revolución de tipo peronista, con mucha corrupción en la cúpula y el apoyo de los trabajadores” (traducción propia. United States Department of State. 1964-1968. Vol. XXXI. Doc. 185). Gordon aseguraba, también, que la situación empeoraba día a día, dando cuenta de “la presencia de elementos muy peligrosos no vigentes con anterioridad” (Traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations 1964-1968, Vol. XXXI. Doc. 184). Ante esta coyuntura, desde Estados Unidos, se planteaban diferentes alternativas de intervención, especialmente la presión económica –que venía siendo aplicada desde hacía tiempo– aunque el Departamento de Estado no estaba seguro de los efectos que tales estrategias podrían generar: “¿Debemos abandonar, enfriar o modificar la estrategia de la negociación de la deuda para evitar reforzar el prestigio de Goulart? ¿Debemos retener la aprobación o el anuncio de aprobación de los préstamos de la AID? ¿Existe otra medida no militar deseable para polarizar la situación para desfavorecer a Goulart?” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations 1964-1968, Vol XXXI. Doc.190. Telegram from the Department of State to the Ambassador to

Brazil). Finalmente, bajo la iniciativa de los sectores disidentes internos y el apoyo de los Estados Unidos, se llevó a cabo un proceso de desestabilización que incluía la posibilidad de derrocar al gobierno de Goulart por medio de un golpe militar.

De este modo, se pueden definir dos momentos clave en el derrocamiento del orden democrático: un primer momento orientado a la desestabilización (en el contexto de una situación interna de crisis e internacional de descrédito del gobierno vigente), y una segunda etapa destinada al golpe de Estado Militar (Fico, 2008: 76) En el marco de la primera etapa, se llevaron a cabo las campañas de presión política y económica por parte del gobierno estadounidense. La presión política se puso en evidencia en la decisión tomada por miembros del Consejo de Seguridad Nacional, la AID y el Departamento de Estado, destinada a “buscar que el gobierno de Brasil se oriente hacia un cambio político y económico” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc. 230). La decisión se materializó en el apoyo económico de Estados Unidos a los grupos opositores de Goulart en las elecciones de 1962 con una inversión de aproximadamente 5 millones de dólares (Fico, 2008: 78).

Los sectores que se oponían a Goulart, según el gobierno estadounidense, eran los “legítimos sectores democráticos que se oponían al comunismo”, como algunos congresistas, la mayoría de los gobernadores provinciales, un importante grupo en las fuerzas armadas, la comunidad de industriales de San Pablo, los medios de información masiva, la iglesia y algunos sectores de trabajadores y estudiantes (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc. 235). Efectivamente, no sólo las capas más elevadas de la clase dominante apoyaron el derrocamiento de Goulart, sino también “las burguesías y las capas intermedias en contra del ‘peligro comunista’, de la subversión interna y de la presión de las masas sobre el Estado” (Cardoso y Faletto, 1973: 156), escenario parecido al planteado en Guatemala.

En un documento elaborado por el Departamento de Estado y la AID, se aseguraba que de todos estos grupos “los militares parecen constituir la única fuerza capaz de mantener y restaurar el orden público, y si fuera necesario, de reordenar el gobierno y remediar el deterioro económico producido por las políticas del presente régimen, en

caso de que la situación se ‘le vaya de las manos’” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations, 1961-1963. Vol. XII. Doc. 240). En síntesis, como la “inestabilidad” económica y política “podía hacer estallar al país en cualquier momento”, había que tomar medidas de manera inmediata, proponiéndose como líder de la “resistencia democrática” al militar Castelo Branco (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. Vol. XXXI. Doc.187).

En caso de que fracasara el operativo montado a nivel nacional, los Estados Unidos intervendrían con apoyo en armas y militares para asegurar los resultados. Esto último fue denominado “operación *Brother Sam*”, que si bien no fue llevada a cabo, demuestra el apoyo decisivo de Estados Unidos al derrocamiento de Goulart (Fico, 2008: 101; traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. V. XXXI Doc.193 y 203). El golpe de abril de 1964, según uno de sus líderes fue ‘una contrarrevolución preventiva’ y Goulart dimitió sin resistencia (Bambirra y Dos Santos, 1984: 154). Por último, un dato a destacar es que el derrocamiento de Goulart no fue informado al presidente Johnson sino un par de horas después de consumado el hecho, con lo cual se pone en evidencia la influencia de ciertos sectores del gobierno – especialmente de la CIA y los órganos de decisión vinculados a ella– para llevar a cabo ciertas acciones, incluso sin la avenencia del presidente²¹.

Como bien lo definieron los miembros del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, la estrategia de derrocamiento de Goulart abría una nueva etapa en los mecanismos de Golpe de Estado en América Latina: “la actual revuelta en Brasil no es la de un ‘golpe’ tradicional del tipo latinoamericano, sino una combinación de gobernadores, funcionarios de gobierno y líderes militares que se han unido para

²¹ El 2 de abril de 1964 (12:25 a.m. EST), la Oficina de la Embajada en Brasilia informó que el Presidente Goulart se había ido de Brasil en un avión. El Subsecretario de Estado Ball, que estaba controlando la situación desde Washington, describió su rol en los eventos subsiguientes: "A las tres de la mañana, estaba en el Departamento, lo que era normal en momentos de crisis. Rusk estaba en algún lado afuera. Como mencioné, las crisis parecen haber ocurrido siempre cuando yo estaba bajo el rol de Acting Secretary. No sé por qué. Finalmente, bajo la extrema urgencia de nuestro embajador allá que era [Lincoln Gordon], envié un telegrama que tuvo el efecto de, en efecto, reconocer al nuevo gobierno. Goulart no estaba del todo fuera del país, yo me estaba arriesgando. Pero funcionó perfectamente y fue muy efectivo. Fue una de esas cosas que pusieron un punto final a la gestión de Goulart. Pero el Presidente estaba furioso conmigo, la única vez que lo vi realmente enojado conmigo, pienso. ¿Por qué no lo puse en conocimiento? ¿por qué hice esto sin que él lo supiera? Yo dije ‘Eran las tres de la mañana, Sr. Presidente’. El dijo ‘Nunca más hagas eso. No me interesa qué hora de la mañana sea, quiero saber. No estoy diciendo que lo que hiciste estuvo mal, pero después de lo sucedido quiero saber’ (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. Vol. XXXI. Doc. 204. Editorial Note).

derrocar a Goulart en el momento en que estos grupos se convencieron de que Goulart estaba llevando a Brasil hacia el desastre económico y político” (traducción propia. United States Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. V. XXXI Doc.208. Summary Record of the 526th Meeting of the National Security Council With the Congressional Leaders).

El nuevo gobierno de Castelo Branco fue reconocido casi de inmediato por la presidencia de Johnson (Fico, 2008: 127). Con su dictadura se inició un período de dos décadas de gobiernos militares, anulación de los derechos constitucionales y represión desde el Estado. Durante la década de 1960, hubo una creciente apertura de la economía brasileña y un estrechamiento de las relaciones con Estados Unidos, a los fines de concretar un “milagro económico” en condiciones de represión absoluta. Según el embajador Gordon “la revolución” impulsada en Brasil “fue una de las victorias más decisivas para la libertad hacia mediados de siglo XX (...) uno de los puntos de inflexión en la historia del siglo XX” (Chomsky, 2003: 25). Veamos, entonces, otro caso paradigmático: el derrocamiento de Salvador Allende en Chile.

El derrocamiento de Salvador Allende en Chile

La acción encubierta en Chile se extendió por diez años, contando con especial apoyo de las empresas estadounidenses en las diferentes medidas aplicadas²². De hecho, a principios de los sesenta, la economía chilena se caracterizaba por el predominio de empresas estadounidenses en la extracción de cobre y en el sector manufacturero en general (Foreign Relations, 1964-1968, Vol. XXXI. Doc. 249. Memorandum From Gordon Chase of the National Security Council Staff to the President’s Special Assistant for National Security Affairs). En orden a los importantes intereses involucrados, lo que preocupaba a los empresarios, especialmente los del sector extractivo, era la posibilidad de que asumiera algún líder político “nacionalista”, capaz de perjudicar los intereses “privados”.

²² La mayor parte de la información acerca de la intervención del gobierno estadounidense en Chile es la provista por el “Informe Church”. Este informe fue elaborado por Frank Church, quien en 1972 fue nombrado presidente del Subcomité de Corporaciones Multinacionales del Congreso de los Estados Unidos.

En 1964, el gobierno de Estados Unidos implementó varias estrategias para evitar que Salvador Allende accediera a la presidencia, porque se preveía que “entre los efectos inmediatos de una victoria de Allende, estaría el pánico virtual entre las clases altas y las medias altas, y una paralización en la inversión privada (...) El impacto económico negativo será muy grande casi de manera inmediata, en el corto plazo. Allende, probablemente, tratará de expandir actividades y esfuerzos de aquellas instituciones del gobierno chileno que se hallan involucradas en la compensación de las pérdidas del sector privado” (traducción propia. Foreign Relations, 1964-1968, Volume XXXI. Doc. 251. Telegram From the Embassy in Chile to the Department of State). Se tomaron medidas de diversa índole orientadas a presionar en el ámbito económico, político y financiero. Con respecto a la presión económica, los lineamientos se orientaron a: 1) proveer asistencia encubierta a la campaña de Frei (Candidato de la Democracia Cristiana) por medio de la CIA, así como también para otros candidatos opositores a Allende; 2) otorgar préstamos de la Agencia Internacional para el Desarrollo, que se aproximaran a los 70 millones de dólares, particularmente destinados a mantener el nivel de inversión del gobierno para estabilizar la economía y evitar el desempleo (60 millones ya estaban disponibles); 3) examinar los medios para aliviar los costos de vida, asegurando la provisión y el precio bajo de alimentos; 4) asistir a los grupos de empresarios con información a través del grupo de negocios de David Rockefeller²³ (Foreign Relations, 1964-1968, Vol. XXXI Doc. 253. Memorandum From the Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Mann) to Secretary of State Rusk).

Por otro lado, algunos funcionarios del Departamento de Estado se reunieron con empresarios de la ITT (más precisamente con su presidente, Harold S. Geneen) a fin de verificar cuánto podían aportar estas empresas para lograr la estabilización de los precios de los alimentos. Los banqueros e industriales se mostraron deseosos de colaborar en las acciones políticas con un millón y medio de dólares, aproximadamente (Foreign Relations, 1964-1968, Vol. XXXI Doc 256. Transcript of Telephone

²³ David Rockefeller lideró a las empresas transnacionales estadounidenses agrupadas en el “Council of the Americas”. La incidencia de este tipo de organizaciones en los gobiernos nacionales, así como los miembros que la impulsaron e integraron y sus proyectos, resultan fundamentales para dar cuenta de la “débil frontera” entre los intereses públicos y privados, tanto en el gobierno estadounidense, como en los de América Latina. Este organismo sigue vigente hasta nuestros días.

Conversation Between Director of Central Intelligence McCone and the Under Secretary of State (Ball).

Incluso después de la amplia victoria de Frei, lo importante parecía ser que la mayoría de los empresarios con intereses en Chile habían manifestado que estaban tranquilos si Frei asumía la presidencia ya que estimaban las negociaciones con el poder eran posibles (Foreign Relations, 1964-1968, Vol. XXXI Doc. 269. Editorial Note). A su vez, una vez electo el nuevo presidente, Bundy (President's Special Assistant for National Security Affairs) le indicaba al presidente Johnson que era necesario "un embajador que sea fundamentalmente amigable con la causa de la reforma democrática [propuesta por Frei] pero realista con respecto a la satisfacción de los intereses de nuestros hombres de negocios" (traducción propia. Foreign Relations, 1964-1968, Vol. XXXI 271. Memorandum from the President's Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to President Johnson)²⁴.

El partido de Frei, la Democracia Cristiana, gestada durante la década de 1930 a partir de la alianza entre el Partido Conservador Social-Cristiano y la Falange, había centrado su proyecto en el cambio del modelo de industria sustitutiva de importaciones (ISI) liviana hacia una de bienes de consumo de larga duración tal como ya se producía en otros países de la región tales como Brasil, Argentina, México o Colombia.

Efectivamente, cuando Frei accedió a la presidencia (1964-1970), adquirió primacía el capital monopolista industrial, en el marco del avance de las empresas multinacionales, lo cual alimentó el patrón de "desarrollo asociado" entre la inversión pública y privada. Tal es el caso de la "chilenización del cobre" en la que se mantenía la explotación en manos privadas pero se agregaban inversiones nacionales para aumentar la producción y la comercialización del producto. Por otro lado, Frei propiciaba la reforma agraria, de latifundios considerados tierra improductiva, una medida anunciada en campaña y que resultaba una respuesta al apoyo político de sectores tales como el

²⁴ No obstante, a pesar de haberse llevado a cabo este tipo de operativo encubierto con la anuencia de diferentes sectores empresariales y del gobierno estadounidense, esto no implicaba la inexistencia de tensiones, teniendo en cuenta las graves consecuencias que esta intervención podría implicar, aspecto notado por Mann (Assistant Secretary), que advertía que la relación entre el gobierno y las empresas había adquirido un peligroso nivel de publicidad, por lo cual quizás resultaría mejor dejar fuera del asunto al "sector privado" estadounidense" (Foreign Relations, 1964-1968, Vol. XXXI. Doc 257). Finalmente, la CIA no aceptó de manera directa el apoyo económico de las empresas (especialmente de la ITT), pero contactó a estos empresarios con los sectores indicados para que el dinero fuera destinado a la campaña de Frei (Informe Church III.A.4).

proletariado rural, el campesinado y los sectores marginales urbanos (De Riz, 1979: 76-78).

De cualquier manera, el gobierno no pudo poner en práctica de manera exitosa todas sus promesas, y la relación con los sectores que lo habían apoyado en un principio se fue desgastando, otorgando legitimidad a los partidos de izquierda, especialmente a la Unión Popular (UP), liderada por Allende, identificado con la transición al socialismo que proponía un cambio del sistema hegemónico. Este proyecto de la UP logró articular al bloque popular en torno al movimiento obrero, como sector capaz de hegemonizar a la clase dominada chilena. De esta manera, la UP reunió a aquellos grupos que habían salido de la pasividad con la Democracia Cristiana, pero que no habían visto satisfechas sus demandas (Ibidem, 89-91). Es así como, el político chileno, cofundador del Partido Socialista (1933), candidato a presidente en 1952, 1958 y 1964, llegó finalmente al Poder Ejecutivo de Chile, como primera mayoría relativa en una elección muy dividida (36,6%) el 4 de Noviembre de 1970, presentándose como el primer gobierno socialista en llegar al poder por la vía democrática.

Desde el punto de vista norteamericano, el panorama se presentaba como adverso para los intereses de las empresas estadounidenses, que eran de mucho peso hacia principios de los setenta. Frente a la frase de campaña “Nacionalizando el cobre dejaremos de ser pobres”, un memorando del Departamento de Estado aseguraba que “las propiedades de las cinco compañías estadounidenses de cobre implicadas, todavía no han sido nacionalizadas, hablando estrictamente, si bien es cierto que el proceso legal de nacionalización está llevándose a cabo y que las compañías mismas están seguras de que este proceso era irreversible. Por lo tanto, de jure, hay en la actualidad, casos pendientes [en Chile] que totalizan un valor en libro de 300 millones de dólares” (traducción propia. Trade Policies. Doc 152. Memorando from Acting Secretary of State Irwin to President Nixon). La respuesta casi directa fue la presión económica, que incluía recorte de los préstamos bilaterales del gobierno, así como también de la asistencia financiera y garantías de la inversión privada estadounidense, e incluso la

persuasión de organismos financieros internacionales para limitar la asistencia a Chile (Trade Policies, Doc. 149. Editorial Note)²⁵.

La campaña en contra de Allende, contó con mayor apoyo e impunidad que la implementada a partir de 1964. Esta nueva estrategia contó con dos fases: la primera, se centraba en presiones económicas y políticas y se llevó a cabo principalmente antes de las elecciones de septiembre de 1970, con el sostén del gobierno de los Estados Unidos, empresas multinacionales y la CIA. La meta última de esta etapa era que Frei aceptara las condiciones y consintiera el plan para suceder a Allende en caso de que fuera derrocado. La segunda fase implicaba el apoyo a ciertos sectores de las Fuerzas Armadas para incitar a un golpe militar. Esta fase fue implementada por la CIA después de la victoria de Allende, con la autorización de Nixon (el 15 de septiembre de 1970) sin darla a conocer al resto de las agencias del gobierno o al Congreso²⁶.

La fase I se caracterizó por una serie de acciones denominadas “operaciones ruina”, destinadas no sólo a apoyar a los candidatos opositores a Allende, sino más bien a liquidar a la Unión Popular que agrupaba a la izquierda. Estos objetivos se enumeraban de la siguiente manera: “1) minar los esfuerzos comunistas para crear una coalición de fuerzas de izquierda para llegar a la presidencia en 1970; 2) reforzar a los líderes

²⁵ El 4 de diciembre de 1972 el presidente Allende dio a conocer públicamente la situación de Chile en relación a las compañías estadounidenses y a las instituciones multilaterales. Con respecto a estas últimas, aducía: “Hasta la iniciación de mi gobierno, Chile recibía por concepto e préstamos otorgados por organismos financieros internacionales, tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, un monto de recursos cercano a 80 millones de dólares al año. Violentamente, estos financiamientos han sido interrumpidos. En el decenio pasado, Chile recibía préstamos de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del gobierno de los Estados Unidos, por un valor de 50 millones de dólares (...) Al asumir la presidencia, mi país contaba con líneas de crédito a corto plazo de la banca privada norteamericana, cerca de 220 millones de dólares. En breve plazo, se ha suspendido de estos créditos, un monto de alrededor de 190 millones de dólares, suma que hemos debido pagar al no renovarse las respectivas operaciones” (Allende en Selser, 1975: 95-96).

²⁶ Para complementar esta información, conviene agregar la cita textual del informe Church: “En 1970, el gobierno estadounidense y varias corporaciones multinacionales estuvieron vinculadas en oposición a la candidatura y, posteriormente, a la presidencia de Salvador Allende. Esta conexión entre la CIA y las corporaciones multinacionales puede ser dividida en dos fases. La primera fase, que implicó acciones llevadas a cabo por la CIA y las multinacionales estadounidenses en un momento en que la política oficial del gobierno estadounidense era la de no apoyar, ni siquiera de modo encubierto, a ningún candidato o partido en Chile. A lo largo de esta fase, se autorizó, sin embargo, la operación encubierta “ruina” para vencer a Salvador Allende. La segunda fase coordinó las acciones de las agencias de inteligencia y las corporaciones multinacionales después de las elecciones de septiembre de 1970. A lo largo de esta fase, el gobierno estadounidense se opuso a Allende y apoyó a sectores de la oposición. El gobierno buscó el apoyo de las multinacionales en este esfuerzo” (Informe Church II.C.2).

políticos no marxistas en Chile para desarrollar una alternativa eficaz a la coalición de la Unidad Popular previendo las elecciones de 1970” (Informe Church, III, C, 3). La CIA gastó aproximadamente 1 millón de dólares en acciones encubiertas para evitar la victoria de Allende en las elecciones de 1970 (Informe Church, III.C.1). Por otro lado, la presión política implicaba la intervención en elecciones de diputados y senadores, como las de 1969, cuando 10 de los 12 candidatos apoyados por la CIA fueron efectivamente elegidos (Informe Church, III.C.2). El embajador de los Estados Unidos en Chile, Edward Korry (uno de los principales opositores a Allende), contribuyó con un plan de dos alternativas: la primera, orientada a implementar una campaña en contra Allende a nivel general, y la segunda, para asegurar los votos contrarios a Allende en el Congreso en caso de que este quedara entre los dos mejores candidatos. La acción encubierta de las “operaciones ruina” no tuvieron el efecto esperado, y Allende ganó las elecciones del 4 de septiembre de 1970, aunque sí contribuyeron a la polarización política y al pánico financiero (Informe Church, III.C.4).

Después de la victoria de Allende, se profundizó la presión económica: “en general, el Comité de los 40 aprobó recortes de todos los créditos, presiones a empresas para reducir sus inversiones en Chile e involucrar a otras naciones para colaborar en el proyecto”²⁷. Asimismo, se creó una agencia especial para coordinar actividades económicas hacia Chile, conformada por el jefe de la CIA de la División del Hemisferio Occidental y representantes del Estado en el *National Security Council* y el Tesoro (Informe Church. III D c). En un Chile donde la situación económica se deterioraba significativamente después del crecimiento inicial de 1971, con desabastecimiento e inflación, bajo la presión externa, se sumaban las medidas llevadas a cabo por grupos de la oposición dentro de Chile, particularmente las huelgas del sector de transporte y la minería. De esta forma, la presión de las empresas estadounidenses y del gobierno de Estados Unidos encontró terreno fértil en los diversos grupos y sectores que se oponían al plan de gobierno de Allende. La democracia cristiana, que en un primer momento había apoyado el proyecto socialista, se volvió en su contra ejerciendo un bloqueo parlamentario; la clase media se alineó a los reaccionarios por medio de la consigna

²⁷ Este comité era un Grupo Especial compuesto por una comisión gubernamental interagencias, que durante el gobierno de Johnson se denominaba “Comisión 303”. El Comité de los 40 era el órgano del Consejo de Seguridad Nacional encargado de aprobar operaciones secretas de inteligencia (Selser, 1975: 21)

“democracia o dictadura”; el sector de transportes, con su potente gremio, encabezó las numerosas huelgas que erosionaron la alianza del gobierno con el sector obrero y las patronales; los medios de comunicación y por último, el levantamiento de buena parte de las fuerzas armadas chilenas (De Riz, 1979)²⁸.

Con respecto a los planes en oposición a la elección y luego a la asunción de Allende, puede decirse que generaron varias tensiones y desacuerdos entre las agencias del gobierno de Estados Unidos y entre aquel y las empresas. Así, cuando la Comisión 40 aprobó aumentar en marzo de 1970 el presupuesto para las operaciones ruina contra Allende, algunos funcionarios del Departamento de Estado votaron “sí” pero con reticencias; del mismo modo, en julio de 1970, la CIA se negó a recibir fondos ofrecidos por la ITT (Informe Church, III.C.2). En el contexto de estas tensiones, no es un dato menor que el presidente Nixon obligara a la CIA a mantener en secreto la “fase II” del operativo en contra de Allende (Informe Church, IV.A 1). De este modo, del total de los 13 millones de dólares que la CIA destinó a operaciones encubiertas en Chile durante dicho período, el Congreso recibió informes (a veces antes y otras veces después de los operativos) que totalizaban la asignación de solamente 7.1 millones de dólares. De más está decir, que el Congreso tampoco recibió los informes que no llegaban a manos del Comité de los 40, como lo referido a la “Fase II” destinada al golpe de Estado a Salvador Allende (IV. B. Congressional Oversight). Por último, vale agregar que al interior del Comité de los 40 tampoco había completo acuerdo con respecto a las medidas a seguir, especialmente en el período anterior a las elecciones y los meses posteriores, cuando el Departamento de Estado se mostró escéptico acerca intervenir en el proceso electoral chileno, al tiempo que la CIA, el embajador estadounidense en Chile, el Departamento de Defensa y la Casa Blanca, se definieron a favor de dicha intervención (Informe Church, IV A 3).

Con el Golpe comandado por Pinochet en septiembre de 1973, los militares chilenos se proclamaron como la única agencia integradora de la nación capaz de asumir la dirección de la sociedad, la única capaz de poner orden (implementando al pie de la letra las premisas de la Doctrina de Seguridad Nacional). Quedó claro que ya no se

²⁸ Es fundamental recordar que las reformas radicales propuestas por Allende contaron con la oposición de varios sectores, lo cual contribuyó a la crisis de su gobierno hacia 1972

buscaría una solución “política” a las tensiones. Además, a partir de la dictadura de Pinochet, se tomaron una serie de medidas orientadas a la liberalización de la economía, bajo la asesoría de los “Chicago Boys”, economistas formados en Estados Unidos que plantearon las bases teóricas y prácticas del neoliberalismo, como antesala de los lineamientos que luego implementarían gobiernos democráticos a finales de los ochenta para resolver la crisis de la deuda.

Conclusión

El derrocamiento de Arbenz fue el primer golpe exitoso de la CIA en América Latina y constituye una suerte de “bisagra histórica” con respecto a la articulación entre la seguridad hemisférica y la seguridad interna (luego denominada Doctrina de Seguridad Nacional); asimismo, plantea de modo claro la articulación entre los intereses del Estado (públicos) y el interés de la cúpula empresarial en los lineamientos de política exterior estadounidense. El derrocamiento de Goulart, puso en evidencia el enorme apoyo del sector civil (especialmente los empresarios e industriales) a las fuerzas de Castelo Branco, como “consenso” frente a posibles cambios en la estructura económico-política y de poder, dando cuenta de igual modo de la red de poder establecida entre buena parte de la clase dominante brasileña y la elite de poder estadounidense. El derrocamiento de Allende es paradigmático en cuanto a la decisión de Estados Unidos de impedir el éxito de una “democracia socialista” en la región, pues Chile no era una isla “aislada” como Cuba; también en este caso fue fundamental la alianza entre los intereses privados y la política exterior estadounidense y el modo en que ello se articuló con la intervención encubierta de la CIA (que operó desde 1962 hasta 1973).

A partir de estos casos pueden enumerarse las siguientes características de los lineamientos de la política exterior estadounidense hacia América Latina durante las primeras décadas de la Guerra Fría: tendió a identificar al nacionalismo y la justicia social con el comunismo (lo cual habilitaba su combate inmediato) aún en los casos de izquierdismo moderado; se posicionó como el garante de las inversiones privadas por lo que asumía su “derecho” a intervenir en asuntos internos de otros Estados; en países muy dependientes de la inversión extranjera se contribuyó a generar un escenario propicio para los “intereses” estadounidenses por lo que se utilizó la presión económica

y psicológica a los fines de crear escenarios de “inestabilidad” que justificaran la intervención de las Fuerzas Armadas locales (apoyadas directa o indirectamente por el gobierno estadounidense); se proporcionó un rol fundamental a las Fuerzas Armadas locales para garantizar el “clima de negocios” indicado para la expansión del sistema capitalista; muchos de los embajadores estadounidenses estuvieron dispuestos a realizar tareas de inteligencia y colaborar con operativos encubiertos en contra de gobiernos elegidos democráticamente.

Uno de los puntos cruciales si se consideran los documentos y la discusión teórica mencionada al inicio de este escrito, es que los intereses de las grandes empresas se planteaban como sinónimo de “los intereses de Estados Unidos”²⁹, así como complementarios a la idea de “seguridad nacional”, según los lineamientos de los sucesivos gobiernos estadounidenses, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, queda claro que la estabilidad era una condición indispensable para la expansión del mercado y de la inversión privada estadounidense, por lo que el Estado norteamericano ingresó como actor clave en tanto garante de dicha estabilidad (por medio de la intervención indirecta o directa en asuntos internos de países latinoamericanos).

También llama la atención la continuidad en las estrategias para debilitar, desestabilizar y derrocar gobiernos no dispuestos a cumplir con los lineamientos planteados por el gobierno estadounidense, estrategias centradas en la presión económica, la presión psicológica y, especialmente, el apoyo a las fuerzas armadas locales, una cuestión bien alejada del discurso oficial “pro democracia” . En medio de este contexto, se acentuaba el proceso de militarización de la política latinoamericana. Esto fue posible, debido a que la integración del capitalismo, después de 1945, incidió profundamente y de modo progresivo en el sector político militar de todo el mundo capitalista, por medio de un sistema de tratados y acuerdos militares que lo vinculaban a la defensa del “mundo occidental y cristiano” (Dos Santos, 1972: 121-122) y porque el

²⁹ El 25 de febrero de 1970, Meyer ante un “grupo de empresarios reunidos en privado en el Hotel Barbizon Plaza, de Nueva York, para debatir asuntos vinculados con los negocios Iberoamericanos (...) dijo en la ocasión que América latina ‘es esencial para la seguridad de Estados Unidos, por nuestro propio interés y no únicamente por razones políticas o geográficas’. Con similar franqueza añadió que el 30 por ciento del comercio norteamericano está concentrado en los países latinoamericanos y que las inversiones de las empresas y del gobierno de Estados Unidos en la región ascendían a 12 billones de dólares. ‘En términos de mercado –dijo- América latina solo es superada por Europa occidental y por Canadá’ (Selser, 1972: 130).

crecimiento de la economía capitalista líder (la estadounidense) dependía del complejo industrial-militar (Melman, 1972; Magdoff, 1975).

Chomsky (2003: 4), sostiene que en la periferia, la “contención” estaba dirigida contra cualquier intento local de superar la pobreza y el descontento, que eran resultado de la intervención sistemática de Estados Unidos, y contra las medidas de justicia social que eran “intolerables” para los gobiernos apoyados por Estados Unidos, o de modo más preciso, para aquellos (sujetos, grupos y sectores) dispuestos a obtener ganancias de la explotación, la opresión y el sufrimiento. En este punto conviene señalar que, ni las explicaciones realistas ni las liberales, dan cuenta de modo específico de los intereses involucrados en las acciones y decisiones del gobierno estadounidense, que estaban indudablemente vinculadas a la expansión de la economía estadounidense hacia la periferia, más allá de los enfrentamientos “ideológicos” que eran evidentes en los discursos de funcionarios estadounidenses y que tanto el realismo como el liberalismo tomaron como punto de partida del análisis.

Considerando el contexto actual de América Latina, vale señalar que el presidente boliviano Evo Morales, en una de las reuniones de Ministros de Defensa de las Américas (noviembre 2010) manifestó su preocupación por la injerencia de Estados Unidos en la región, especialmente en lo relativo a los operativos de desestabilización de gobiernos que no “cooperan” en la implementación de los lineamientos estadounidenses: “Tuve que enfrentar que un embajador (de Estados Unidos, Philippe Goldberg) organice y planifique para acabar, antidemocráticamente, con mi gestión y siento que eso se repite en todo el mundo (...) hay que cuidarse de la embajada de Estados Unidos; siempre ha habido golpes de Estado en toda Latinoamérica. Sólo no hay golpes en Estados Unidos, porque no hay embajada estadounidense en Estados Unidos” (La Jornada, 23 noviembre).

Una semana después de esas declaraciones, wikileaks publicó archivos que dan cuenta de las comunicaciones entre el Departamento de Estado estadounidense y sus embajadas en diferentes partes del mundo, que dejan ver el modo en que los diplomáticos estadounidenses llevaban a cabo operativos de espionaje y de injerencia en asuntos internos y personales de funcionarios de gobierno y de organismos internacionales de diversos países. Estos documentos ponen de manifiesto el modus

operandi del gobierno estadounidense en el exterior, exhibiendo indicios de que hoy como ayer, su injerencia en asuntos internos de los países latinoamericanos, permanece.

La recuperación de archivos que han sido desclasificados hace algunas décadas, es una manera de contribuir a la reconstrucción de la memoria de América Latina, permite volver a reflexionar sobre algunos hechos fundamentales sucedidos a partir de la posguerra (que no debieran ser dejados en un “pasado remoto”). Esto se corresponde con la idea de que la historia es un proceso que hace a nuestro presente, y que entonces, resulta un punto de partida inevitable para comprender con mayor profundidad los acontecimientos actuales en nuestra región.

Referencias bibliográficas

Adams, W. P. (1976), *Los Estados Unidos de América*. México, Siglo XXI.

Allison, G. (1988), *La esencia de la decisión. Análisis explicativo de los misiles en Cuba*. Buenos Aires, GEL.

Baran, P. y Sweezy, P. (1974), *El capital monopolista. Ensayo sobre el orden económico y social de los Estados Unidos*. Buenos Aires,; Siglo XXI.

Barbé, E. (1995), *Relaciones Internacionales*. Madrid, Tecnos.

Barnet, R. (1974), *Guerra perpetua: Los hombres y las instituciones responsables de la política exterior de Estados Unidos*. México, FCE.

Caputo, O. y Pizarro, R. (1975), *Imperialismo, dependencia y relaciones económicas internacionales*. Buenos Aires, Amorrortu.

Cardoso, F. H. y Faletto, E. (1973) *Dependencia y desarrollo en América Latina*. México, FCE.

Cardoza y Aragón, L. (1955), *La revolución guatemalteca*. México, Cuadernos Americanos.

Castro, F. (2010), “El discurso de Evo” [en línea] disponible en:
<http://lapupilainsomne.wordpress.com/2010/11/25/el-discurso-de-evo/>

Cohen, J. y Arato, A. (1994), *Civil Society and Political Theory*. Cambridge, MA and London, MIT Press.

Cotler, J. C. y Fagen, R. R. (comp.) (1973), *Relaciones políticas entre América Latina y Estados Unidos*. Buenos Aires, Amorrortu.

Chomsky, N. (2003), *Towards a new Cold War*. New York, The New Press.

Cullather, N. (2006), *Secret History: The CIA's classified account of its Operations in Guatemala, 1952-1954*. California, Stanford University Press.

Del Arenal, C. (1994), *Introducción a las Relaciones Internacionales*. Madrid, Editorial Tecnos.

Delgado Ramos, G. C. y Romano, S. M. (2011), "Political-Economic Factors in U.S. Foreign Policy: The Colombia Plan, the Mérida Initiative, and the Obama Administration" *Latin American Perspectives*, julio 2011; vol. 38, 4: pp. 93-108

De Riz, L. (1979), *Sociedad y política en Chile. De Portales a Pinochet*. México, UNAM, pp. 53-93.

Dominguez, J. (2000), "The @#\$%& Missile Crisis: (Or, what was 'cuban' about U.S. decisions during the cuban missile crisis)", *Diplomatic History*, vol 24, nº 2, primavera, pp 305-315.

Dos Santos, Th. (1975), "La estructura de la dependencia" en *Economía política del imperialismo*. Buenos Aires, Ediciones Periferia.

Dunne, T. y Schmidt, S. (2001), "Realism" en Baylis, John & Smith, Steve *The Globalization of world politics. An introduction to international relations*. New York, Oxford

Fernandes, Florestán, (1979), *Mudanças sociais no Brasil*. Río de Janeiro, Difel
- (2008), *A revolução burguesa no Brasil*. San Pablo, Globo.

Gaddis, John, [1972] (1989), *Los Estados Unidos y los orígenes de la Guerra fría*. Buenos Aires: GEL.

- (2003), "Ideología, economía y solidaridad de alianzas". *De Sur a Norte*, vol. 5, núm. 5, Centro de Estudios Americanos, Buenos Aires, pp. 81-119.

Gandásegui, M. A. (2009), "Las interrogantes sobre el Golpe de Estado en Honduras ¿Quién maneja la política exterior de EEUU?" *Periferias*. Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, año 31, núm 18. Buenos Aires.

Golinger, E. (2005), *El Código Chávez: descifrando la intervención de los Estados Unidos en Venezuela*. Caracas, Questión.

Grandin, G. (2004), *The last colonial massacre. Latin America in the Cold War*. Estados Unidos, University of Chicago Press.

Griffith, R. y Baker, P. (eds.) (2001), *Major problems in American history since 1945*. Boston, Houghton Mifflin.

Hobsbawm E. (1999), *Historia del Siglo XX*. Buenos Aires, Grijalbo Mondadori.

Hoffman, Stanley (1988), *Orden mundial o primacía: La política exterior norteamericana desde la Guerra Fría*. Buenos Aires: GEL.

- (1991), *Una Ciencia Social Norteamericana: relaciones internacionales en Hoffmann, Stanley Jano y Minerva. Ensayos sobre la Guerra y la paz*. Buenos Aires, GEL.
- (1995), "The crisis of liberal internationalism", *Foreign Policy*, Spring 95, Issue 98.

Hermann, Ch.; Stein, J.; Sundelius, B. y Walker, S. (2001), "Resolve, accept or avoid: effects of group conflict on Foreign Decision policy" *International Studies Review*. Special Issue *Leaders, Groups and Coalitions: understanding the people and processes in foreign policymaking*. Oxford UK, Blackwell, pp. 133-168.

Hermann, M., Preston, Th., Korany, B. y Shaw T. (2001), "Who leads matters: The effects of powerful individuals" *International Studies Review* Special Issue *Leaders, Groups and Coalitions: understanding the people and processes in foreign policymaking*. Oxford UK, Blackwell, pp. 83-132.

Holsti, O. [1979] (1999), "Crisis decision making" en Viotti, Paul y Kauppi, Mark *International relation theory. Realism, pluralism, globalism, and beyond*. Estados Unidos, Pearson Education, pp. 269-280.

Insulza, J. (1982), "La Primera Guerra Fría: Percepciones Estratégicas de la 'Amenaza Soviética' (1945-1968)" en *Cuadernos Semestrales* nº 12. México, CIDE.

Johnson, D. (1970), "Dependencia, desnacionalización del desarrollo y sistema internacional" en Guder Frank, Andre; Cockroft, James y Johnson, Dale, *Economía política del subdesarrollo en América Latina*. Buenos Aires, Signos, pp. 93-192.

Jonas, S. (1979), "La democracia que sucumbió. La revolución guatemalteca de 1944 a 1954" en Tobis, David y Jonas, Susane *Guatemala, una historia inmediata*. México, Siglo XXI, pp. 83-110.

Joseph, G. (2004), "Lo que sabemos y lo que deberíamos saber: la nueva relevancia de América Latina en los estudios sobre la Guerra Fría" en Spenser, Daniela [coord]. *Espejos de la Guerra Fría: México, América Central y el Caribe*. México, CIESAS-Porrúa, pp. 67-94.

Katz, F. (2004), “La Guerra Fría en América Latina” en Spenser, Daniela [coord]. *Especjos de la Guerra Fría: México, América Central y el Caribe*. México, CIESAS-Porrúa, pp.11-30.

Kolko, G. (1968), *The Politics of War*. New York, Random House.

La Jornada, 23 noviembre 2010 “Evo Morales lanza acusaciones contra EU ante Robert Gates” [en línea] disponible en:

<http://www.jornada.unam.mx/2010/11/23/mundo/022n1mun>

LaFeber, W. (1963), *New Empire: An Interpretation of American Expansion, 1860-1898*. New York, Ithaca.

Leffler, M. (1999), “The Cold War: What do ‘we do know’?” *American Historical Review*, april, pp 501-524.

Leguizamón, H. (1985), “Goulart. El nacionalismo en Brasil” en *Historia de América en el Siglo XX*. Buenos Aires, CEAL, pp.58-82.

Lenin, (1972), *El imperialismo, etapa superior del capitalismo*. Buenos Aires, Editorial Polémica.

Lieuwen, E. (1960), *Armas y política en América Latina*. Buenos Aires, Sur.

Loayza, M. (2003), “An ‘Aladdin’s’ Lamp for Free Enterpriser: Eisenhower, Fiscal Conservatism, and Latin American Nationalism, 1953-1961” *Diplomatic History*, vol. 14, núm. 3 (septiembre). Londres, Frank Cass.

Magdoff, H. (1975), “Militarismo e imperialismo” en Magdoff, Harry, Dos Santos Theotónio, Wolff, Richard y Sweezy, Paul *Economía política del imperialismo*. Bs As, Ediciones Periferia.

McCann, Th. (1976), *An American Company. The tragedy of United Fruit*. New York, Crown.

Mecham, J. L. (1961), *The United States and the Interamerican System 1889-1960*. Austin, Austin University Press.

Meiksins Wood, E.(2000), *Democracia contra capitalismo: la renovación del materialismo histórico*. México, Siglo XXI Editores.

Melman, S. (1972), *El capitalismo del Pentágono: la economía de guerra*. México, Siglo XXI.

Miliband, R. (1970), *El Estado en la sociedad capitalista*. México, Siglo XXI.

Moniz Bandeira, L. (2004), *Argentina, Brasil y Estados Unidos. De la Triple Alianza al MERCOSUR*. Buenos Aires, Norma.

Morgenthau, H. [1948] (1986), *Política entre las naciones. La lucha por el poder y la paz*. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano.

Pollard, R. (1990), *La seguridad económica y los orígenes de la Guerra Fría 1945-1950*. Buenos Aires, GEL.

Pozzi, P. (2003), “Estados Unidos y los orígenes de la Guerra Fría”, *De Sur a Norte*, vol. 5, núm. 5, Centro de Estudios Americanos, Buenos Aires, pp. 13-21.

Rabe, S. (1988), *Eisenhower and Latin America. The Foreign Policy of Anticommunism*. University of North Carolina Press, Chapel Hill y Londres.

Rapoport, M. y Laufer, R. (2000) “Los Estados Unidos ante Brasil y Argentina. Los golpes militares en la década del 60” *Estudios disciplinarios de América Latina y el Caribe*, vol. 11, núm. 2 julio-diciembre [en línea]. Disponible en: http://www.tau.ac.il/eial/XI_2/rapoport.html

Romano, S. M. (2011), “Liberal democracy and national security: continuities in the Bush and Obama administrations” *Critical Sociology*, noviembre (proof)

<http://crs.sagepub.com/content/early/2011/11/18/0896920511419903?patientinform-links=yes&legid=sprcrs:0896920511419903v1>

Rourke, J. (2005), *International politics on the world stage*. Estados Unidos, McGraw-Hill.

Saull, R. (2004), “El lugar del sur global en la conceptualización de la guerra fría: desarrollo capitalista, revolución social y conflicto geopolítico” en Spenser, Daniela [coord]. *Espejos de la Guerra Fría: México, América Central y el Caribe*. México, CIESAS-Porrúa, pp.31-66.

Saxe-Fernández, J. (1975), *Proyecciones hemisféricas de la Pax Americana*. Buenos Aires, Amorrortu.

Schlesinger, A. Jr., (1990), *Los ciclos de la historia americana*. Buenos Aires, R.E.I.

Schlesinger, S. y Kinzer, S. (1987), *Fruta amarga. La CIA en Guatemala*. México, Siglo XXI.

Schumpeter, J. ([1919] (1951), “El imperialismo como atavismo social” en Joseph Schumpeter. *Imperialism and social classes*. Londres, Traducción de la cátedra Historia Contemporánea, Escuela de Historia, Universidad Nacional de Córdoba.

Selser, Gregorio (1972), *De la CECLA a la MECLA: O la diplomacia panamericana de la zanahoria*. Buenos Aires, Carlos Samonta.

- (1975) *De cómo Nixinger desestabilizó Chile*. Buenos Aires, Hernández Slater, J. (1967), *The OAS and the United States foreign policy*. Ohio, Ohio State University Press.

Smith, R. (1991), "América Latina, los Estados Unidos y las potencias europeas 1830-1914", en Bethell, Leslie (ed.) *Historia de América*, Cambridge University. Vol. 7. Barcelona, Editorial Crítica, pp. 73-105.

Stockes, D. (2003), "Why the end of the Cold War doesn't matter: the US war of terror in Colombia" *Review of International Studies*, n.29, 569-585 *British International Studies Association*, pp. 569-585.

Sunkel, O. (1975), *Capitalismo transnacional y desintegración nacional en América Latina*. Buenos Aires, Nueva Visión.

Sweezy, P. (1973), *Capitalismo e imperialismo Norteamericano*. Buenos Aires, Merayo.

Sweezy, P. y Magdoff, H. (1972), *Dinámica del capitalismo norteamericano. La estructura monopolista, la inflación, el crédito, el oro y el dólar*. México, Nuestro Tiempo.

Tapia Valdés, J. (1980), *El terrorismo de Estado. La doctrina de la seguridad nacional en el Cono Sur*. México, Nueva Imagen.

Tejeda, A. (2010), "Los cambles documentan los esfuerzos estadounidenses por aislar a Chavez". *La Jornada*, México, 29 noviembre [en línea] Disponible en:

<http://www.jornada.unam.mx/2010/11/29/index.php?section=politica&article=004n2pol>
[U](#)

UNDP-OEA (2010) *Nuestra democracia*

http://www.nuestrademocracia.org/pdf/nuestra_democracia.pdf

Veneroni, H. (1971), *Estados Unidos y las fuerzas armadas de América Latina*. Buenos Aires, Ediciones Periferia.

Williams Appleman, W. (1960), *La tragedia de la diplomacia norteamericana*. Buenos Aires, Grijalbo.

Wills, G. (2010), *Bomb power. The modern presidency and the national security state*. New York, Penguin Books

Wood, B. (1985), *The dismantling of the Good Neighbor Policy*. Austin, University of Texas Press.

World Bank (2010), *World Development Indicators*, CD Rom.

Wright Mills, Ch.(1978), *La élite del poder*. México, Fondo de Cultura Económica.

Documentos

Informe Church

<http://foia.state.gov/reports/churchreport.asp>

USAID, 2008, <http://www.usaid.gov/pubs/cp2000/pl480ffp.html>

The National Security Archive. CIA and the Guatemala Assassinations Proposals 1952-1954.

Departamento de Estado de los Estados Unidos:

United States Department of State Founding of the National Intelligence Structure. August 1945-January 1946. Doc. 26. United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Volume IV. Doc. 3. National Intelligence Estimate.

United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Volume IV. Doc. 13 Editorial Note.

United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Volume IV Doc. 17. Draft Policy Paper Prepared in the Bureau of Inter-American Affairs.

United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Volume IV. Doc. 15. National Intelligence Estimate.

United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Volume IV. Doc. 16. Memorandum by the Officer in Charge of Central America and Panama Affairs (Leddy) to the Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Cabot).

United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Volume IV. Doc. 8. Memorandum of Conversation, by the Acting Officer in Charge of Central America and Panama Affairs).

United States Department of State. Foreign Relations. 1952-1954, Volume IV 6. Memorandum by the Deputy Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Mann) to the Secretary of State).

United States Department of State. Foreign Relations 1964-1968, Vol XXXI Doc. 183. Telegram From the Embassy in Brazil to the Department of State.

United States Department of State. Foreign Relations 1964-1968, Vol XXXI. Doc. 184. Telegram From the Embassy in Brazil to the Department of State.

United States Department of State. Foreign Relations 1964-1968, Vol XXXI. Doc. 190. Telegram From the Department of State to the Ambassador to Brazil.

United States Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. V. XXXI Doc.187. Telegram From the Ambassador to Brazil (Gordon) to the Department of State/1/Rio de Janeiro, March 28, 196.

United States Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. V. XXXI Doc.208. Summary Record of the 526th Meeting of the National Security Council With the Congressional Leaders.

United States Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. V. XXXI. Doc. 186. *Telegram from the Embassy in Brazil to the Department of State.*

Foreign Relations, 1964-1968, Volume XXXI. Doc. 249. Memorandum From Gordon Chase of the National Security Council Staff to the President's Special Assistant for National Security Affairs.

Foreign Relations, 1964-1968, Volume XXXI. Doc. 251. Telegram From the Embassy in Chile to the Department of State.

United States Department of State. Foreign Relations. 1964-1968. V. XXXI. Doc. 204. Editorial Note.

Foreign Relations, 1964-1968, Volume XXXI Doc. 253. Memorandum From the Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Mann) to Secretary of State Rusk).

Foreign Relations, 1964-1968, Volume XXXI Doc 256. Transcript of Telephone Conversation Between Director of Central Intelligence McCone and the Under Secretary of State (Ball).

Foreign Relations, 1964-1968, Volume XXXI. Doc 257. Memorandum for the Record).

Foreign Relations, 1964-1968, Volume XXXI Doc. 269. Editorial Note).

Foreign Relations, 1964-1968, Volume XXXI 271. Memorandum From the President's Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to President Johnson).

Trade Policies. Doc 152. Memorandum from Acting Secretary of State Irwin to president Nixon.

United States Department of State. Foreign Relations, Volume IV, Foreign Assistance, International Development, Trade Policies. Doc. 157. Paper prepared for the Senior Review Group.

United States Department of State. Foreign Relations, Volume IV, Foreign Assistance, International Development, Trade Policies. Doc 153. Memorandum from Acting Secretary of State Irwin to president Nixon

United States Department of State. Foreign Relations, Volume IV, Foreign Assistance, International Development, Trade Policies Editorial Note 149.

United States Department of State. Foreign Relations, Volume IV, Foreign Assistance, International Development, Trade Policies Doc. 169, National Security Memorandum.

United States Department of State. Foreign Relations, Volume IV, Foreign Assistance, International Development, Trade Policies. Doc. 166. Memorandum from the Assistant Secretary of the Treasury for International Affairs (Petty) to Secretary of the Treasury Connally).

United States Department of State. Foreign Relations, Volume IV, Foreign Assistance, International Development, Trade Policies. Doc. 149. Editorial Note.

United States Department of State. Foreign Relations, Volume IV, Foreign Assistance, International Development, Trade Policies Doc. 157.

United States Department of State. Foreign Relations, Volume IV, Foreign Assistance, International Development, Trade Policies, 158. Memorandum from the Deputy Legal Adviser of the Department of State (Aldrich) to the Under Secretary of State (Irwin).

United States Department of State. Foreign Relations, Volume IV, Foreign Assistance, International Development, Trade Policies. Do. 165. Action Memorandum from the President's Assistant for National Security Affairs (Kissinger) to President Nixon.

United States Department of State. Foreign Relations, Volume IV, Foreign Assistance, International Development, Trade Policies. Doc. 171. Memorandum form Secretary of State Rogers to President Nixon.